



TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

CURSO ACADÉMICO 2017-2018

**EL DERECHO A LA IDENTIDAD: ESPECIAL TRATAMIENTO
DE LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO**

**THE RIGHT TO THE IDENTITY: SPECIAL TREATMENT OF
THE CORRECT IDENTIFICATION OF THE NEWBORN**

AUTORA: ANDREA FRANCO DE MIGUEL

DIRECTORA: LAURA FERNÁNDEZ ECHEGARAY

RESUMEN:

El objeto de este trabajo consiste en analizar, desde una perspectiva jurídica, la trascendencia del derecho a la identidad personal en nuestro ordenamiento jurídico, centrándonos en lo que se viene a denominar ‘derecho a la identidad biológica’. Para garantizar este derecho, se debe tomar como punto de partida el nacimiento de la persona, dada la importancia que adquiere la inequívoca identificación del recién nacido en el momento del parto, tomando en consideración los diferentes métodos empleados para ello. Se examinará, además, el alcance que tiene en nuestros días la posibilidad de conocer los orígenes biológicos para las personas adoptadas y para aquellas nacidas mediante técnicas de reproducción humana asistida. Y, por último, también se indagará en otros elementos de la identidad personal, que van más allá del aspecto biológico, tales como el nombre, los apellidos y la nacionalidad.

ABSTRACT:

The objective of this project is to analyse, from a juridical perspective, the transcendence of the right to the personal identity in our legal system, focusing on what is called ‘right to biological identity’. In order to guarantee this right, it must be taken as the starting point the birth of the person, due to the importance that the unmistakable identification acquires in the moment of the delivery, considering the different methods used for that. Moreover, it will be examined the scope that nowadays the possibility of knowing the biological origins has, for adopted people and for those who were born using assisted reproduction techniques. And it will explore other elements of personal identity, that go further than the biological aspects, such as name, surname or nationality.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. LA IDENTIDAD PERSONAL	7
2.1. El derecho a la identidad personal y el bien jurídico protegido.....	8
2.2. La protección del derecho a la identidad personal.....	9
3. LA IDENTIDAD BIOLÓGICA Y EL DERECHO A CONOCER LOS ORÍGENES BIOLÓGICOS 12	
3.1. La adopción	14
3.1.1. El parto anónimo o maternidad desconocida.....	15
3.1.2. El derecho de los adoptados a conocer sus orígenes.....	18
3.2. Técnicas de Reproducción Humana Asistida	22
3.2.1. El anonimato del donante	23
3.2.2. Especial tratamiento de la gestación por sustitución	27
4. LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL RECIEN NACIDO.....	28
4.1. Métodos de identificación	30
4.2. Normativa estatal.....	32
5. REGULACIÓN AUTONÓMICA DEL DERECHO A LA IDENTIDAD.....	35
5.1. Andalucía	35
5.2. Aragón	36
5.3. Asturias	36
5.4. Cantabria	37
5.5. Castilla La Mancha	38
5.6. Castilla León	38
5.7. Cataluña	39
5.8. Extremadura.....	40
5.9. Galicia.....	40
5.10. Islas Baleares	41
5.11. Islas Canarias.....	41
5.12. La Rioja	42
5.13. Madrid	42
5.14. Murcia	42

5.15. Navarra	43
5.16. País Vasco	43
5.17. Comunidad Valenciana.....	43
6. ELEMENTOS MUTABLES DE LA IDENTIFICACIÓN	44
6.1. El derecho al nombre y apellidos.....	44
6.2. Derecho a una nacionalidad.....	47
7. CONCLUSIONES.....	49
8. BIBLIOGRAFÍA.....	56

ABREVIATURAS

Ap.	Apartado
Art./arts.	Artículo/artículos
CC	Código Civil
CE	Constitución Española
FJ	Fundamento Jurídico
LRC	Ley del Registro Civil
LTRHA	Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida
Ob. cit.	Obra citada
P./pp.	Página/páginas
RRC	Reglamento del Registro Civil
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TC	Tribunal Constitucional
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TS	Tribunal Supremo

1. INTRODUCCIÓN

La identidad personal se trata de un concepto amplio, que abarca diferentes dimensiones y derechos. Nuestra Constitución no reconoce un '*derecho a la identidad personal*' de manera expresa. Pese a ello, vamos a ver cómo algunas de las expresiones de este derecho sí que vienen a estar protegidas tanto por nuestra Constitución, como por diversas normas internacionales, estatales y autonómicas. Además, tanto la jurisprudencia de nuestros tribunales y de los tribunales internacionales, junto con las diferentes opiniones doctrinales, nos van a ayudar a comprender qué es lo que abarca este derecho y cómo se puede hacer efectiva su protección.

La identidad se trata de un aspecto fundamental para la psicología dentro del estudio de la persona, su desarrollo y su salud mental. Pese a las dificultades existentes a la hora de definirla, todos los psicólogos coinciden en que su adquisición y desarrollo es una necesidad básica y fundamental para las personas, siendo el resultado del equilibrio existente entre el sentimiento de semejanza y pertenencia y el de diferencia e individualidad¹.

La verdad biológica o identidad biológica es el punto de partida de este derecho, y donde este trabajo se centra. El proceso de identidad comienza con el nacimiento de la persona², de ahí la importancia que adquiere que el recién nacido sea correctamente identificado en el momento de su nacimiento para poder asegurar su propia verdad personal sin lugar a duda. A tenor de ello, este trabajo se centra en analizar la normativa y los métodos empleados tras el parto para identificar al recién nacido con su madre.

El proceso de identidad, además, va a durar toda la vida, siendo la etapa de la adolescencia a la que más interés se presta, pues es cuando el propio sujeto construye el núcleo de lo que será su identidad adulta³. Los estudios psicológicos se han centrado en la importancia del conocimiento de los orígenes biológicos en la adopción y en los niños nacidos mediante técnicas de reproducción humana

¹ GÓMEZ BENGOCHEA, B: '*Derecho a la identidad y filiación*', Ed. Dykinson 2007, pp. 29-32.

² *Ibídem*, p. 33.

³ *Ibídem*.

asistida, pero se trata de un problema que también afecta a todas aquellas que personas que, por diversas razones, ignoran quien es su madre o padre biológico⁴. En esta línea se analizará el tratamiento jurídico que ofrece nuestro ordenamiento para aquellas situaciones en las que una persona desea tener acceso a sus datos biológicos, y se verá hasta dónde puede llegar o hasta dónde puede verse limitado este derecho.

Asimismo, se trata de un derecho que, como veremos, va a colisionar en ocasiones con derechos de rango fundamental, por lo que se deberá entrar a valorar y ponderar, en cada caso concreto, el alcance de este derecho. En este sentido nos vamos a encontrar opiniones no exentas de polémica en nuestro ordenamiento jurídico y en los ordenamientos de nuestro entorno, como la figura del parto anónimo, el anonimato de los donantes en la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida o en el mero proceso de búsqueda de orígenes.

Para concluir, cabe plantearse si debería nuestro ordenamiento jurídico considerarlo como un derecho fundamental o, si pese a no ser considerado como tal, goza ya de la suficiente y adecuada protección, dado que para muchos se fundamenta indudablemente en derechos de rango fundamental. También se debe reflexionar sobre su dispersa y, quizá, no suficientemente armonizada regulación y, sobre las diferencias que nos vamos a encontrar, en función del tipo de filiación ante la cual nos encontremos o por razón de nacimiento, en el momento en que una persona decide iniciar la búsqueda de sus orígenes. Todo ello no sin plantearnos si, tras los recientes avances científicos, se está haciendo todo lo posible para garantizar la inequívoca identificación de los recién nacidos respecto de sus madres nada más producirse el parto.

2. LA IDENTIDAD PERSONAL

La identidad tal y como la entendemos ahora se trata de un concepto bastante reciente y difícil de definir teóricamente, dado que tiene múltiples significados,

⁴ GÓMEZ BENGOCHEA, B: '*Derecho a la identidad y filiación*', ob. cit., p. 33.

dimensiones y funciones⁵. Podría definirse la identidad como el conjunto de datos biológicos, atributos y características que permiten distinguir sin ningún género de duda a una persona de todas las demás. Por tanto, la identidad consiste en '*ser uno mismo y no otro*'⁶. Desde el punto de vista psicológico, la identidad está relacionada en cómo una persona responde a las preguntas de ¿quién soy?, ¿de dónde vengo? y ¿a dónde voy?⁷.

La identidad se conforma de dos elementos inseparables y complementarios. Cabe diferenciar, en primer lugar, un elemento estático, fruto de la información genética de cada persona. Se trata de datos inalterables, singulares y únicos, que no pueden ser modificados; comúnmente se suele llamar 'identificación' a tal aspecto biológico del ser humano. Se asocian a este elemento estático otros caracteres que también permiten identificar a un sujeto, como son el nombre, la filiación, la fecha y lugar de nacimiento y caracteres somáticos, entre otros, pese a que, como excepción, estos sí que pueden sufrir variaciones en ciertas ocasiones. Por otro lado, se observa un elemento dinámico que se compone de los diferentes atributos, características y rasgos propios de la personalidad de una persona (la cultura, el carácter, la ideología, las creencias...), que se sostienen en la libertad de una persona y pueden variar en el tiempo.⁸

2.1. El derecho a la identidad personal y el bien jurídico protegido

Cuando hablamos del derecho a la identidad personal cabe preguntarse por el bien jurídico protegido, que es en este caso la llamada '*verdad personal*'. Se trata de un concepto más amplio, que abarca no sólo ya los datos estáticos y dinámicos que componían la identidad, sino que se añaden las actuaciones entre sujetos originadas por el derecho a la libertad, la exteriorización de las expresiones de la persona, así como la paternidad de sus actuaciones o comportamientos, pues será cada sujeto el verdadero titular de todas estas conductas.

Cuando se atenta contra esa '*verdad personal*', a través de conductas tales como desvirtuar, falsear, desnaturalizar, alterar, distorsionar u ocultar tal verdad, atribuyendo a

⁵ GÓMEZ BENGOCHEA, B: '*Derecho a la identidad y filiación*', ob. cit., p. 28.

⁶ FERNÁNDEZ SESSAREGO, C: '*Derecho a la identidad personal*', Ed. Astrea, 1992, pp. 248-149.

⁷ GÓMEZ BENGOCHEA, B: '*Derecho a la identidad y filiación*', ob. cit., p. 29.

⁸ FERNÁNDEZ SESSAREGO, C: '*Derecho a la identidad personal*', ob. cit., pp. 248-249.

una persona características, comportamientos o ideas que no constituyen parte de su ‘*verdad personal*’ o negándole aquellas que le son propias, es cuando se lesiona la identidad personal ⁹.

El libre desarrollo de la personalidad, derecho fundamental reconocido en el art.10.1 de nuestra Constitución Española (CE)¹⁰, como elemento dinámico de la identidad, hace digna de protección la identidad. Para la configuración de esa identidad que se podría denominar también ‘*moral*’, los elementos estáticos que hemos visto no son suficientes, pero sí ‘*conditio sine qua non*’, siendo el conocimiento de la ‘*verdad biológica*’ el centro gravitatorio del derecho a la identidad personal.

La identidad personal como derecho abarca diferentes dimensiones merecedoras de protección que, en ocasiones, pueden colisionar con otros derechos (por ejemplo, y como se verá más adelante, con los derechos fundamentales relativos a la intimidad y privacidad de la familia)¹¹.

2.2. La protección del derecho a la identidad personal

El primer reconocimiento expreso de este derecho lo encontramos en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1987 ¹², a la cual nos remite la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor en su artículo tercero¹³. La Convención establece en su artículo 8 que: «1. *Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, nombre y relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.* 2. *Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección*

⁹ FERNÁNDEZ SESSAREGO, C: ‘*Derecho a la identidad personal*’, ob. cit., pp. 250 a 256.

¹⁰ «BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.

¹¹ VILLAMAYOR F: ‘Protección jurídica del derecho a la identidad en la adopción: Incidencia de la Convención de los Derechos del Niño’ en *Lecciones y Ensayos*, n.º 83, Universidad de Buenos Aires, 2007, pp. 296 a 299.

¹² Ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, «BOE» n.º 313, de 31 de diciembre de 1990.

¹³ «BOE» núm. 15, de 17/01/1996. Entrada en vigor 16 de febrero de 1996.

adecuadas con miras a restablecer rápidamente su identidad». También su artículo 7 reconoce el derecho del niño a ser inscrito desde su nacimiento, el derecho a un nombre, a una nacionalidad y ‘*en la medida de lo posible*’ a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos; los Estados parte velarán por estos derechos conforme a su legislación nacional y los instrumentos internacionales de los que sean parte.

También reconoce el derecho a la protección de la identidad la Carta Europea de los Derechos del Niño¹⁴. Concretamente especifica con relación al conocimiento de los orígenes biológicos, que habrán de tenerse en cuenta las limitaciones de las legislaciones de cada estado «*para la protección de los derechos de terceras personas*» y que, además, estas legislaciones «*deberán determinar las condiciones bajo las cuales se otorgarán al niño las informaciones relativas a sus orígenes biológicos*». También se refiere al derecho al registro desde el nacimiento, al nombre, a la nacionalidad y otros elementos de la ‘identidad dinámica’.

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos¹⁵, de Nueva York, de 16 de diciembre de 1966, también recoge expresamente el derecho al nombre y la inscripción después del nacimiento en el correspondiente registro, así como la protección del derecho a la intimidad familiar. También recoge el derecho de todo niño a adquirir una nacionalidad.

La Resolución A3-314/91, de 31 de diciembre de 1991 del Parlamento Europeo sobre los problemas de los niños en la Comunidad Europea¹⁶, contempla el derecho de todo niño a conocer su filiación biológica, además de ser informados de cualquier deficiencia genética y posibilidades de heredarla.

Además de lo anterior, hay que poner de manifiesto que el artículo 5 del Convenio-marco para la Protección de las Minorías Nacionales, nº 157 del Consejo de Europa de 1995¹⁷, establece que las partes deberán promover las condiciones necesarias para mantener y desarrollar su cultura preservar los elementos esenciales de su identidad; en su artículo 11 se hace referencia al nombre y al apellido.

¹⁴ «DOCE» núm. C 241, de 21 de septiembre de 1992.

¹⁵ «BOE» núm. 103, de 30 de abril de 1977.

¹⁶ «DOCE» núm. C 13, de 20 de enero de 1992.

¹⁷ «BOE» núm. 20, de 23 de enero de 1998.

Pese a que no hay una alusión expresa al derecho a la identidad, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales¹⁸, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, consagra en sus artículos 8 y 14 el respeto de la vida privada y familiar y la igualdad de goce de derechos, sin distinción por motivos de, entre otros, nacimiento. Los conceptos jurídicos indeterminados de estos artículos han derivado en la labor interpretativa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha pronunciado en contadas ocasiones, considerando que dentro de la esfera de la vida privada protegida por el Convenio se encuadra la identidad personal, comprendiendo también la identidad genética.

Si atendemos al Derecho Comparado nos encontramos con tres tendencias distintas en cuanto a las manifestaciones que protegen este derecho. Hay países, como Portugal o Perú¹⁹, en los que se recoge el derecho a la identidad como un derecho autónomo en sus Constituciones. Existen otros países en los que, pese a que sus Constituciones no recogen la identidad o alguna de sus manifestaciones, sí que se llega a reconocer este derecho en normas infraconstitucionales, como es el caso, por ejemplo, de México y Estonia. Otros Estados, pese a no recoger en sus Constituciones expresamente el derecho, sí que protegen algunas de sus expresiones; aquí es donde podríamos ubicar a España.²⁰

La Constitución Española de 1978²¹ no recoge expresamente el derecho a la identidad, pero los Convenios Internacionales mencionados con anterioridad forman parte del ordenamiento jurídico español, vinculando así a los poderes públicos. Una manifestación del derecho a la identidad la podemos encontrar en el artículo 39²² de nuestra Constitución cuando se refiere a la investigación de la paternidad. El conocimiento del origen biológico

¹⁸ «BOE» núm. 243, de 10 de octubre de 1979.

¹⁹ La Constitución Peruana de 1993 reconoce el derecho a la identidad en su artículo 2.1., junto al derecho a la vida o el desarrollo de la personalidad, como un derecho fundamental.

²⁰ GÓMEZ BENGOCHEA, B: '*El derecho a la identidad*', ob. cit., pp. 61 a 64

²¹ «BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.

²² «1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.»

en realidad va más allá de este artículo, como después veremos, pero parte de la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo han asociado este artículo con los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 10 y 15 de nuestra Constitución, que reconocen el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la integridad física y moral. Es por ello, que muchos autores han llegado a considerar que, dada esa relación, el conocimiento de los orígenes biológicos se trataría de un derecho fundamental que debería ser protegido como tal, ya que constituye el punto de partida de la historia de cada uno, siendo presupuesto de todos los demás derechos.²³

Además de todo lo anterior, hay que destacar que la regulación que encontramos en las Comunidades Autónomas es variada. Algunas lo recogen expresamente, otras no hacen mención expresa, pero regulan algunos de sus aspectos (como la filiación, la identificación del recién nacido o la inscripción en el Registro Civil), y hay otras en las que directamente lo que se hace es remitirse a otras normas de nuestro ordenamiento jurídico²⁴.

3. LA IDENTIDAD BIOLÓGICA Y EL DERECHO A CONOCER LOS ORÍGENES BIOLÓGICOS

Vamos a partir del concepto aportado por A. George Steward, quien explica que cabe distinguir 4 tipos de identidad. En primer lugar, la identidad familiar que incluiría el derecho a conocer y estar con la familia de origen e incluiría también el derecho a ser identificado dentro de esa familia mediante el nombre de esta. En segundo lugar, una identidad biológica que se correspondería con la información médica y genética del niño y sus parientes. Por último, habría una identidad tribal en relación con los aspectos religiosos, étnicos y culturales y, a su vez, una identidad política que vendría dada por la nacionalidad²⁵. El análisis se va a centrar sobre lo que Stewart denomina '*identidad biológica*' en relación con lo que también ha denominado '*identidad familiar*', como parte

²³ GÓMEZ BENGOCHEA, B: '*El derecho a la identidad*', ob. cit., pp. 64 a 67.

²⁴ *Ibíd.*, p. 74.

²⁵ STEWARD GEORGE, A: 'Interpreting the Child's Right to Identity in the U.N. Convention on the Rights of the Child', 26 Fam. L. Q., 221 (1992) en Garriga Gorina, M: '*La Adopción y el Derecho a Conocer la Filiación de Origen: Un estudio legislativo y jurisprudencial*', Aranzadi, 2000.

de ese elemento estático de la identidad al que hace referencia Sessarego y, también sobre otros caracteres de la identidad estática tales como el nombre, los apellidos y la nacionalidad.

Se debe tener en cuenta que los conceptos de filiación, maternidad, paternidad, hijo o hija pueden corresponderse con un ámbito natural o biológico o con un ámbito jurídico sin que necesariamente concurren ambos. En la filiación por naturaleza, la filiación legal tiende a coincidir con la biológica; en el caso de la maternidad, se evidencia del hecho biológico del embarazo y del parto, y la paternidad ya es más incierta. En la adopción, la filiación legal se contradice con la realidad biológica, pero el vínculo de filiación es exactamente el mismo que en el caso de la filiación por naturaleza. Y, la atribución de la filiación jurídica mediante el uso de las técnicas de reproducción humana asistida va a depender de los usuarios, del tipo de procedimiento empleado, de la posibilidad o no de la fecundación *'post-mortem'* y de la gestación por sustitución²⁶.

En virtud del principio *'mater semper certa est'* la maternidad en nuestro país quedaba determinada por el hecho del embarazo y parto. La maternidad era un resultado biológico y, sobre esta base, que era incuestionable, se cimentó nuestro ordenamiento jurídico. Pero ¿qué alcance tiene este principio en nuestros días? Con la aparición de las técnicas de reproducción humana asistida y las nuevas maternidades posibles y resultantes (genética, fisiológica, psicológica o voluntarista) se plantean diversos problemas²⁷. Una importante novedad es que con el art.2 de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil²⁸, que modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil²⁹, se introduce en la nueva redacción del art.44, en su cuarto apartado que *«la filiación se determinará, a los efectos de la inscripción de nacimiento, de conformidad con lo establecido en las leyes civiles y en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida»*. Pero

²⁶ SÁNCHEZ MARTINEZ, M^a O: 'Los orígenes biológicos y los derechos de hijos e hijas: filiación y derecho a saber' en *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*, publicado el 19 de febrero 2016, pp. 297 a 299.

²⁷ RIVERO HERNÁNDEZ, F: '¿Mater Semper Certa Est? Problemas de determinación de la maternidad en el ordenamiento jurídico español', en *Anuario de Derecho Civil*, ISSN 0210-301X, Vol.50, núm. 1, 1997, pp. 14-15.

²⁸ «BOE» núm. 167, de 14 de julio de 2015.

²⁹ «BOE» núm. 175, de 22 de julio de 2011.

no con ello parece que se hayan solucionado todos los problemas que se plantean con el deslinde entre maternidad genética y maternidad gestante³⁰. Con dicha reforma de la Ley del Registro, se establece en el mismo art.44, esta vez en su séptimo apartado, que siempre que se compruebe cumplidamente el hecho del parto y la identidad del hijo podrá inscribirse la filiación respecto de la madre mediante expediente aprobado por el encargado del registro, tal y como se venía expresando en el art.49.3 de la LRC de 1975³¹.

Vamos a ver cómo en nuestro ordenamiento jurídico existe, al igual que ocurre en muchos otros ordenamientos, una disimilitud en la protección de la identidad biológica en función del tipo de filiación³², lo cual contrasta con el mandato constitucional del artículo 39.2, pues, se trata de un deber de los poderes públicos garantizar la protección de los hijos, *«iguales éstos ante la ley y con independencia de su filiación»*.

3.1. La adopción

Se debe tener presente que la legislación en materia de adopción ha de regirse por el principio del interés superior del menor. Cabe aquí preguntarse si el derecho del adoptado a conocer sus orígenes, como un derecho a la identidad genética, debería prevalecer sobre el derecho al anonimato y a la intimidad de los padres biológicos³³.

Es un hecho que los niños adoptados, en numerosas ocasiones, manifiestan interés por conocer sus orígenes como una fase del proceso de desarrollo de la personalidad y

³⁰ En los casos de gestación por sustitución se desconoce el factor genético y voluntarista de la comitente que aporta su material genético a la gestante, y la maternidad se determina por el hecho del embarazo y parto; mientras que con el resto de TRHA la maternidad de la mujer gestante, que no tiene por qué ser la genética, si queda determinada por su voluntad de someterse a las técnicas y el hecho del parto.

³¹ «BOE» núm. 151, de 10 de junio de 1957.

³² GÓMEZ BENGOCHEA, B: 'El derecho a la identidad filial o biológica en el Ordenamiento Jurídico Español' en *Revista Cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales*, nº 72, p. 295.

³³ ORDÁS ALONSO, M: 'El parto anónimo a debate' en *Nuevos paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas*, ISSN 2346-0377, vol. VI, nº 11 enero-junio 2015, p. 99.

maduración personal³⁴. Que la persona adoptada no tenga acceso a sus orígenes familiares hace que padezca un sufrimiento del que se pueden derivar diferentes secuelas³⁵. Los adoptados pueden llegar a obsesionarse sobre este aspecto de sus vidas, y su situación también puede llegar a afectar a sus padres adoptivos. Se observa, por tanto, como la información que una persona tenga sobre sus orígenes va a contribuir en la formación de la propia identidad tanto física como psicológica de esa persona³⁶.

3.1.1. El parto anónimo o maternidad desconocida

La figura del parto anónimo o maternidad desconocida ha generado y genera importantes debates doctrinales, pudiendo encontrar ordenamientos jurídicos en los que se admite, en los que queda prohibido o en los que se condiciona esta figura (como es el caso del denominado parto discreto o confidencial).

Concretamente, en nuestro ordenamiento jurídico, van a entrar en conflicto, por un lado, el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar de la madre, contemplado en el artículo 18 de nuestra Constitución, y por otro el derecho a la identidad del hijo que, pese a la falta de mención específica en nuestra Constitución, deriva de los derechos fundamentales del respeto a la dignidad de la persona y del libre desarrollo de su personalidad reconocidos en su artículo 10.

En la actualidad esta figura está prohibida en nuestro ordenamiento, pero no siempre ha sido así, ya que hasta el año 1999 la madre podía ocultar su identidad en el parte del nacimiento o efectuando una declaración de desconocimiento ante el encargado del Registro Civil, en un plazo de 15 días, mediante la cual se cancelaba la inscripción del nacimiento en el Registro. Esta posibilidad derivaba del artículo 47.1 de la LRC de 1957³⁷ y de los artículos 167 y 182 del RRC³⁸, y solo era posible en los supuestos de filiación

³⁴ GARRIGA GORINA, M: *‘La adopción y el derecho a conocer la filiación de origen: Un estudio legislativo y jurisprudencial’*, Ed. Aranzadi 2000, pp. 178-179.

³⁵ ORDÁS ALONSO, M: *‘El parto anónimo a debate’*, ob. cit., p. 99.

³⁶ GARRIGA GORINA, M: *‘La adopción y el derecho a conocer la filiación de origen: Un estudio legislativo y jurisprudencial’*, ob. cit., pp. 178 a 182.

³⁷ «BOE» núm. 151 de 10 de junio de 1957

³⁸ «BOE» núm. 296, de 11 de diciembre de 1958.

extramatrimonial (artículo 120.4 CC³⁹), negándose esta posibilidad en el caso de la filiación matrimonial (familia legítima). La situación cambia tras la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 1999⁴⁰, que declaró la derogación del entonces artículo 47.1 de la LRC y la inaplicabilidad de los citados preceptos reglamentarios, y proclamó la nulidad de los actos realizados bajo su cobertura. Como argumentos, el tribunal manifestó que tales normas chocaban con el '*principio de libre investigación de la paternidad*' (art.39.2 CE), reconocido tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, así como con el principio de igualdad (art.14 CE) entre la madre y el padre y entre la filiación matrimonial y extramatrimonial (dada la posición de prevalencia en la que se posiciona a la madre) y, por último, debido a cómo afecta trascendentalmente tanto a la dignidad de la madre como del hijo, a sus derechos inviolables y a su libre desarrollo de la personalidad. También se hizo mención a la afectación del derecho a la tutela judicial efectiva (art.24.1 CE).

Con ocasión de la mencionada sentencia, a las pocas semanas, se dictó la Orden de 10 de noviembre de 1999 del Ministerio de Justicia⁴¹, que aprobó el nuevo modelo de cuestionario para la declaración de nacimiento ante el Registro Civil. Desaparece la referencia al párrafo segundo del art.167 RRC y se incorporan dos recuadros en blanco en el que deberán constar las huellas dactilares de la madre y del hijo como medio de identificación, a diferencia del modelo anterior en el que solo se incorporaban las del hijo. Fruto de lo anterior, el Encargado del Registro, el Ministerio Fiscal y también las Entidades Públicas competentes en materia de protección de menores tienen la obligación de poner todos los medios a su alcance para averiguar la identidad de las madres y promover la inscripción de la filiación materna. Tal inscripción se realizará siempre que coincidan la declaración y el parte médico. De esta forma la maternidad quedará inscrita en todos los casos al igual que sucedía en los supuestos en que la madre era una mujer casada⁴². Cabe indicar, además que, pese a nulidad de los actos efectuados con anterioridad a la Orden de 10 de noviembre de 1999, es muy probable que nunca se llegue

³⁹ «BOE» núm. 206, de 25 de julio de 1889.

⁴⁰ STS 776/1999, de 21 de septiembre (ponente: Sr. Almagro Nosete)

⁴¹ «BOE» núm. 280, de 23 de noviembre de 1999, pp. 40572 a 40575.

⁴² GARRIGA GORINA, M: '*La adopción y el derecho a conocer la filiación de origen: Un estudio legislativo y jurisprudencial*', ob. cit., pp. 170-171.

a conocer la identidad de la madre biológica pues se ha roto un enlace básico para posibilitar su averiguación al no constar la identidad de la misma^{43 44}.

Conforme a la actual redacción de la LRC de 2011, «*Salvo en los casos a que se refiere el artículo 48* ⁴⁵, *en toda inscripción de nacimiento ocurrida en España se hará constar necesariamente la filiación materna, aunque el acceso a la misma será restringido en los supuestos en que la madre por motivos fundados así lo solicite y siempre que renuncie a ejercer los derechos derivados de dicha filiación*» y añade que «*En caso de discordancia entre la declaración y el parte facultativo o comprobación reglamentaria, prevalecerá este último*».

Los defensores de que el derecho a la intimidad de la madre y su anonimato se trata de un derecho absoluto frente al derecho a conocer los orígenes biológicos lo fundamentan partiendo de que el ‘*secreto*’ protege tanto la vida de la madre como la del niño, pues al primar el anonimato se evitan los abortos tardíos, el abandono y los infanticidios ⁴⁶. Por poner un ejemplo, nuestro país vecino, Francia, nunca ha adoptado en su sistema el principio ‘*mater semper certa est*’. Su Código Civil no cuestiona la figura del parto anónimo. Si la mujer desea preservar el secreto, va a ser informada de las consecuencias que conlleva y se la va a ofrecer la posibilidad de facilitar diferentes informaciones acerca de los orígenes del niño, tales como datos médicos, las circunstancias del nacimiento o hasta su propia identidad en un pliego cerrado y, siempre que la madre lo consienta expresamente, se podrá en cualquier momento levantar el secreto de su identidad⁴⁷.

Es necesario mencionar en esta dirección la Sentencia de la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 13 de febrero de 2003⁴⁸ (caso Odièvre vs. Francia). La señora Pascale Odièvre acude a dicho tribunal, tras agotar las instancias de su país, para solicitar el levantamiento del secreto sobre la identidad de su madre, fundamentando

⁴³ ORDÁS ALONSO, M: ‘El parto anónimo a debate’ ob. cit. pp. 106 a 129.

⁴⁴ GARRIGA GORINA, M: ‘*La adopción y el derecho a conocer la filiación de origen: Un estudio legislativo y jurisprudencial*’, ob. cit., pp. 167 a 169.

⁴⁵ Se refiere a los supuestos de menores abandonados y menores no inscritos.

⁴⁶ VELA SÁNCHEZ, A: ‘El derecho del adoptado a conocer sus orígenes biológicos’, en *Diario La Ley* n° 7526, Sección Doctrina, 13 dic. 2010, Año XXXI, Ref. D-376, p. 4.

⁴⁷ ORDÁS ALONSO, M: ‘El parto anónimo a debate’, ob. cit., pp. 112 a 114.

⁴⁸ STEDH n°. 42326/98, 13 de febrero de 2003.

su pretensión en los artículos 8 y 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Finalmente, el Tribunal manifiesta, por 10 votos contra 7, que no se ha producido una vulneración de dichos artículos. En lo referente a la vulneración del art.8 del Convenio, el Tribunal, entre sus alegaciones, hace referencia a que cuando el Convenio dice '*toda persona*' se refiere tanto al niño (en cuanto al derecho al conocimiento de sus orígenes, que se fundamenta en la noción de vida privada) como a la madre (debido al interés de conservar su anonimato para proteger su salud alumbrando con unas condiciones médicas adecuadas); por lo que se trata de dos intereses privados difícil de conciliar. Además, entran en juego los intereses de terceras personas (como la familia adoptiva, padre y hermanos biológicos) que igualmente tienen derecho al respeto de su vida privada y familiar. Recuerda el Tribunal que son los Estados quienes deben elegir las medidas que garanticen el cumplimiento del art.8 dentro de su margen de apreciación, y considera que Francia no ha excedido este. También se señala que la Señora Odièvre tuvo acceso a informaciones sobre su madre y su familia biológica que, pese a no ser identificativas, la permitieron establecer ciertas raíces de su historia. Añade que, la reciente normativa de país ya permite solicitar la reversibilidad del secreto, sin embargo, necesitará siempre del consentimiento de la madre; pero para el Tribunal se consigue así un equilibrio entre los intereses de ambas partes. En lo referente a la vulneración del art.14, la demandante consideraba que existía una discriminación por razón de nacimiento, basada en la restricción a su capacidad para aspirar a la herencia de su madre biológica. Dicha cuestión la resuelve el tribunal sobre la base de que la pretensión de la demandante es el hecho de la imposibilidad de conocer sus orígenes, y no el hecho de pretender una filiación que la permita adquirir derechos sucesorios, por lo que no puede pretender encontrarse en una situación comparable a la de quienes tienen una filiación reconocida por la que es su madre biológica, pues la demandante ya tiene un vínculo de filiación respecto de sus padres adoptivos con su correspondiente objetivo patrimonial y sucesorio.

3.1.2. El derecho de los adoptados a conocer sus orígenes

Actualmente en nuestro país el adoptado tiene la posibilidad de conocer la identidad de sus progenitores siempre que esta conste en el Registro Civil. Los problemas se plantean, como se ha visto, en los casos en los que el Registro no contiene esa

información; sin embargo, las instituciones que tramitaron esa adopción si pueden contener ciertos datos. Dada la prohibición del parto anónimo, en toda inscripción de nacimiento en nuestro país, por el principio '*mater semper certa est*', debe constar la filiación materna, siempre que se conozca (art.44.4 LRC), aunque el acceso a ésta pueda ser restringido, como veremos. En todo caso, el niño deberá ser inscrito, se conozca o no su filiación (art.48 LRC).

La inscripción de la adopción en el Registro Civil se realiza al margen de aquella del nacimiento, en la cual consta la filiación biológica (así lo venía estableciendo el art.46 de la anterior LRC de 1975, apareciendo ahora reflejado en el actual art.44 LRC). Para estos casos, la Instrucción General de los Registros y del Notariado, de 15 de febrero de 1999⁴⁹ estableció la posibilidad de que los padres adoptivos pudieran solicitar la extensión de una nueva inscripción de nacimiento por medio de expediente (art.77 en relación con art.307 RRC 1957); de este modo, junto a los datos del nacimiento y del nacido, constarán solo los datos de sus padres adoptivos, y la filiación anterior permanecerá en la inscripción originaria cancelada. No obstante, en esta nueva inscripción deberán constar los datos registrales (libro, folio y página) de la anterior, aunque sin aludir a la adopción. En los casos en los que la persona no tiene conocimiento de su condición de adoptado es muy posible que no repare en esa reseña. La inscripción originaria cancelada va a tener una publicidad restringida (art.49.4 de la actual LRC y art.22.1 RRC en relación con 21.1 RRC), solo podrán acceder a ella los adoptantes, el adoptado al cumplir la mayoría de edad y terceros con autorización.^{50 51}

Una cosa que debe quedar clara es, como establece el art.180 CC, que la adopción es irrevocable, y que la determinación de la filiación por naturaleza no afectará en ningún caso a la adopción, lo que hace que carezca (y vaya a carecer) de cualquier vínculo o relación jurídica con su familia biológica (art.178 CC), pese a que pueda, efectivamente, dar con ellos en algún momento⁵².

⁴⁹ «BOE» núm. 52, de 2 de marzo de 1999, pp 8368 a 8368 - Modificada con posterioridad por la Instrucción DGRN de 1 de julio de 2004 («BOE» núm. 161 de 05 de Julio de 2004).

⁵⁰ VELA SÁNCHEZ, A: 'El derecho del adoptado a conocer sus orígenes biológicos', ob. cit., p 10.

⁵¹ GARRIGA GORINA, M: '*La adopción y el derecho a conocer la filiación de origen: Un estudio legislativo y jurisprudencial*', ob. cit., pp. 119 a 121.

⁵² VELA SÁNCHEZ, A: 'El derecho del adoptado a conocer sus orígenes biológicos', ob. cit., p. 1.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia⁵³ cumple con algunas de las recomendaciones del Convenio Europeo en materia de adopción de menores, hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008⁵⁴, reforzando así el derecho de acceso a los orígenes de las personas adoptadas e introduciendo una importante novedad denominada '*adopción abierta*'.

Con anterioridad al año 2007 nuestro Código Civil no se refería al derecho de los adoptados a conocer información sobre su origen. La Disposición Final Primera de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional⁵⁵ introduce un apartado 5 en el artículo 180 del Código, por el cual se reconoce el derecho de las personas adoptadas a conocer los datos de sus orígenes biológicos (al adquirir la mayoría de edad o bien representadas por sus padres), y el deber de las Entidades Públicas de protección de menores de hacer efectivo este derecho prestando asesoramiento y ayuda, notificando previamente a las personas afectadas. Posteriormente, el artículo segundo, en su apartado 24, de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia modifica el apartado 5 de dicho artículo del CC y añade uno nuevo. El actual artículo 180 en su apartado 5 nos dice que las Entidades Públicas deben asegurar y conservar la información relativa a los orígenes del menor, particularmente la identidad de sus progenitores y la historia médica familiar y, al menos, durante 50 años después del momento en que la adopción haya tenido lugar; todo ello para hacer efectivo el derecho a conocer los orígenes biológicos que ahora se reconoce en el apartado 6 tal y como se reconocía en el anterior apartado 5, pero con un adicional párrafo segundo en el cual se establece la obligación de cualquier entidad, ya sea pública o privada, a facilitar la información necesaria sobre el menor y su familia de origen a las Entidades Públicas y al Ministerio Fiscal cuando les sean requeridas⁵⁶. Cabe destacar que con anterioridad las instituciones, en su gran mayoría, se negaban a prestar las informaciones que poseían

⁵³ «BOE» núm. 180, de 29 de julio de 2015.

⁵⁴ «BOE» núm. 167, de 13 de julio de 2011, páginas 77734 a 77743.

⁵⁵ «BOE» núm. 312, de 29 de diciembre de 2007.

⁵⁶ GARRIGA GORINA, M: '*La adopción y el derecho a conocer la filiación de origen: Un estudio legislativo y jurisprudencial*', ob. cit., p. 231.

sobre los progenitores en base a distintos argumentos, entre los cuales, la protección del derecho a la identidad de la familia biológica⁵⁷.

En lo que se refiere a la '*adopción abierta*', el artículo segundo en su apartado 23 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia, que modifica el artículo 178 del CC incluye la posibilidad de que, pese a que los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen hayan quedado extinguidos con razón de la adopción, en interés del menor, tanto éste, como los miembros de su familia de origen que se considere y su familia adoptiva puedan mantener cierta relación o contacto, a través de visitas o comunicaciones. Deberá ser acordado por el juez a propuesta de la Entidad Pública tras una previa valoración de la situación, requiriendo el consentimiento de la familia adoptiva y del adoptado mayor de 12 años o con suficiente madurez.

Conviene aclarar que, no existe, en contrapartida, un derecho de los padres biológicos a conocer los datos de su hijo natural. Pese a que a los hijos adoptados tengan ese derecho no hay que olvidar que están en su derecho de no ejercitarlo, lo cual hay que respetar⁵⁸.

Además, el derecho de los hijos a conocer sus orígenes no es, pues, automático, y necesita del control y la supervisión de aquellas entidades, privadas o públicas, que intervinieron en el proceso. Por eso, las Comunidades Autónomas juegan aquí un papel importante, ya que son estas quienes tienen el deber de conservar la información al respecto (art.21.2º de la Ley 54/2007 de Adopción Internacional).

La Ley estatal no nos habla de la posibilidad de contactar con la familia originaria personalmente, se remite a los servicios especiales de ayuda, asesoramiento o mediación, de lo cual se extrae que, en efecto, se permite, pero adaptándose al caso concreto a través de un tratamiento personalizado. Lo que se pretende es evitar situaciones dramáticas para los afectados⁵⁹. No se puede, en definitiva, obligar a nadie a ponerse en contacto con otra

⁵⁷ GARRIGA GORINA, M: '*La adopción y el derecho a conocer la filiación de origen: Un estudio legislativo y jurisprudencial*', ob. cit., p 219.

⁵⁸ VELA SÁNCHEZ, A: '*El derecho del adoptado a conocer sus orígenes biológicos*' ob. cit. p. 9

⁵⁹ PINTO ANDRADE, C: '*El derecho del adoptado a conocer su filiación de origen*': '*El derecho a conocer el propio origen biológico del adoptado no es un derecho absoluto de éste, sino que tiene matices y sombras que hacen y obligan a que el obligado a decidir contemple y estudie en cada caso concreto: en cada caso se debería proteger el interés, valor o bien jurídico que se considere más digno de protección*'.

persona, ni si quiera judicialmente se puede exigir a los padres biológicos a relacionarse con su hijo por naturaleza. El hijo biológico podrá dar con su identidad, pero estos siempre pueden negarse a conocerle⁶⁰.

En lo que se refiere a la adopción internacional, la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional⁶¹ en su artículo 12 asienta también el derecho a conocer los datos sobre los orígenes que estén en poder de las Entidades Públicas, ahora bien, sin perjuicio de las limitaciones que pudieran derivarse de la legislación de los países de procedencia de los menores.

3.2. Técnicas de Reproducción Humana Asistida

La primera Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) en nuestro país aparece con la aprobación de la Ley 35/1988⁶², de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción humana asistida; siendo una de las primeras entre las legislaciones de nuestro entorno. Dicha ley pretendía dar respuesta a los avances y descubrimientos científicos y tecnológicos de la época, gracias a los cuales no solo se conseguían mitigar los efectos de la esterilidad, sino que también resultaban eficientes para fines diagnósticos, terapéuticos y de investigación. La ley de 1988 experimentó una modificación con ocasión de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre⁶³, cuyo principal objetivo fue dar respuesta al problema del destino de los preembriones supernumerarios crioconservados o congelados, respuesta que resultó solo parcial. Tras esta última promulgación, la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida reiteró la necesidad de otra reforma, y es tras ello cuando se aprueba la actual Ley 14/2006, de 26 de mayo⁶⁴, que deroga las anteriores introduciendo importantes novedades.

La aparición TRHA supone una disociación entre la reproducción y la sexualidad. Eso trae consigo una serie de consecuencias y se plantean nuevos problemas en lo que se

[http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=272#_ftnref64\(25/05/2010\)](http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=272#_ftnref64(25/05/2010))

⁶⁰ VELA SÁNCHEZ, A: 'El derecho del adoptado a conocer sus orígenes biológicos' ob. cit., pp. 9-10.

⁶¹ «BOE» núm. 312, de 29 de diciembre de 2007.

⁶² «BOE» núm. 282, de 24 de noviembre de 1988.

⁶³ «BOE» núm. 280, de 22 de noviembre de 2003.

⁶⁴ «BOE» núm. 126, de 27 de mayo de 2006.

refiere a la filiación⁶⁵. El uso de estas técnicas ha supuesto una crisis en la visión, llamémosla tradicional, que se venía teniendo de la filiación, natural y adoptiva, lo cual ha hecho que se incorpore un nuevo mecanismo para su determinación, que se funda en el principio de voluntad creacional y su extensión a través del consentimiento informado⁶⁶.

Podemos clasificar estas técnicas entre homólogas y heterólogas. En las primeras el material genético empleado va a corresponderse con el de la pareja que se somete a las TRHA y en las segundas se emplea material genético masculino y/o femenino de un tercero que realiza una donación. Los problemas se plantean cuando tiene lugar la intervención de un tercero, el o la donante de gametos (esperma u ovocitos)⁶⁷.

3.2.1. El anonimato del donante

La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida establece en su artículo 5.5. que la donación será anónima y que la confidencialidad de los datos de identidad de los donantes deberá ser garantizada. Si podrán los hijos «*obtener información general de los donantes que no incluya su identidad*»⁶⁸. El artículo de manera excepcional permite que «*en circunstancias extraordinarias que comporten un peligro cierto para la vida o la salud del hijo o cuando proceda con arreglo a las Leyes procesales penales*» pueda revelarse la identidad del donante si se trata de una relevación de carácter indispensable para evitarse el peligro o conseguir el fin legal propuesto⁶⁹. Pero

⁶⁵ FLORES RODRIGUEZ J: 'El derecho a la identidad del niño en las nuevas formas de familia' Ed. La Ley 2014, p. 2

⁶⁶ ORDÁS ALONSO, M: 'El derecho a la identidad genética versus el anonimato del donante en la procreación mediante técnicas de reproducción asistida' en *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil* 2016, nº 1, p. 9.

⁶⁷ GÓMEZ BENGOCHEA B: 'Derecho a la identidad y filiación'. ob. cit., p. 182.

⁶⁸ G. ÁLVAREZ J / MD / PHD en 'Comentarios Científico-Jurídicos a la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida', Ed. Dykinson 2007, p. 85: 'La única información que podrá revelarse serán características fenotípicas del donante como la talla, peso, color de ojos, color de pelo, grupo sanguíneo y Rh, etc...'

⁶⁹ G. ÁLVAREZ J / MD / PHD en 'Comentarios Científico-Jurídicos a la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida', ob. cit., p. 86: 'Por ejemplo, si el hijo requiere de un transplante de médula ósea de un familiar que sea histocompatible y se trata de un claro caso de peligro para el hijo,

en ningún caso dicha revelación va a implicar la determinación legal de la filiación, como establece el art.8 de la LTRHA. Los datos de estos donantes van a quedar custodiados en clave en el correspondiente banco y en el Registro Nacional de Donantes, que aparece regulado por el Real Decreto 412/1996 de 1 de marzo^{70, 71}.

Existe un debate doctrinal acerca del anonimato, en el que se pueden distinguir tres corrientes. La *corriente minimalista* defiende el anonimato y niega que sea inconstitucional. Lo argumentan en que el anonimato fortalece la relación del hijo con la pareja receptora, y en la falta de conveniencia de que interfiera en esa relación otra persona; también sostienen que, dado que nuestro legislador constitucional no pensó en este tipo de técnicas, estos casos deberían regularse teniendo en cuenta otros parámetros. Defienden que tanto la voluntad del donante como de quien acude a este tipo de técnicas debe ser respetada, así como su derecho a la intimidad. Otro de sus argumentos es que gracias al anonimato se favorecen las donaciones. Por el contrario, los *maximalistas* defienden que hay un derecho a conocer la identidad, llegándose algunos a plantear incluso la posibilidad de que pueda ser reclamada la paternidad. Consideran que no es trascendente el hecho de que el legislador constitucional no pensase en estos casos, de forma que no deben hacerse distinciones no contempladas en la ley, estando, quienes han nacido por estas técnicas, protegidos y vinculados por los establecido en la Constitución y en el CC. Para éstos, el secreto absoluto es contrario al art.14 CE ya que discrimina a los nacidos mediante estas técnicas respecto de los hijos naturales; también es contrario al art.15 CE pues, aunque no haya un riesgo para la vida, el desconocimiento del propio origen puede llegar a causar trastornos psíquicos que lleguen a afectar el desarrollo de la personalidad y que ello sea relevante para su integridad. Ello afecta también al derecho a la intimidad personal y familiar del niño reconocida en el art.18 CE y transgrede el ar.39.2, impidiendo al hijo reclamar esa identidad en casos en los que nadie ejerza sobre ellos deberes derivados de la paternidad. Existe, por último, una *posición intermedia* que defiende el derecho a conocer los datos genéticos y la identidad del donante, pero sin que de ello puedan derivarse consecuencias jurídicas tales como la filiación. Lo fundamentan

podría contactarse al donante o progenitor biológico para determinar si es histocompatible y, de ser así, solicitar su consentimiento para donar médula ósea. Sin embargo, en ningún caso implicaría publicidad de la identidad del donante.'

⁷⁰ «BOE» núm. 72, de 23 de marzo de 1996, páginas 11253 a 11256.

⁷¹ GÓMEZ BENGOCHEA B: '*Derecho a la identidad y filiación*', ob. cit., pp. 191-192.

en el derecho a la salud y en el derecho a conocer la propia identidad, y consideran que debería de existir un cauce, distinto de la acción de reclamación de paternidad, con el único fin de identificar a esa persona, sin que ello conlleve ningún deber para ésta, ya sea mediante una acción o mediante una autorización para acceder al Registro Nacional de Donantes.⁷²

Muy interesantes son las proposiciones de una política de ‘*doble vía*’, también denominada ‘*doble ventanilla*’. Con ello se permite a los receptores elegir entre un donante anónimo o no anónimo; o de revelación consensual de la identidad, a través de una autorización previa del donante en el contrato de donación u obtenida con posterioridad a través de los registros de donantes, una vez recibida la solicitud del hijo que quiere conocer su origen genético⁷³. Este es el sistema que desde 1996 adopta Islandia. Finlandia también optó por este sistema, pero finalmente en 2006 se decantó por levantar el anonimato, al igual que Países Bajos⁷⁴. En estos casos, la posibilidad de poder conocer o no el origen genético queda en manos de los receptores.

Nuestro Tribunal Constitucional ya se pronunció en este aspecto, en Sentencia 116/1999⁷⁵, tras la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, de Técnicas de Reproducción Asistida. El Tribunal, entre otras muchas cuestiones, resolvió acerca del conflicto de intereses que se planteaba en relación con el anonimato, pues por un lado está el derecho de una persona a conocer su filiación biológica, es decir, sus orígenes biológicos, y por otro la protección del derecho a la intimidad personal y familiar del donante en cuestión. El Tribunal entendió que el artículo 39.2 de la Constitución según el cual «*La ley posibilitará la investigación de la paternidad*» es compatible con el precepto sobre el anonimato de las donaciones, pues la Constitución utiliza el término ‘*posibilitar*’, lo que según el Tribunal ‘*no significa la existencia de un derecho incondicionado de los ciudadanos que tenga por objeto la averiguación, en todo caso y al margen de la concurrencia de causas justificativas que lo desaconsejen, de la identidad de su progenitor*’. En este sentido, solo podría tal

⁷² GÓMEZ BENGOCHEA, B: ‘*Derecho a la identidad y filiación*’, ob. cit., pp. 195 a 201.

⁷³ ORDÁS ALONSO, M: ‘El parto anónimo a debate’, ob. cit., p. 21.

⁷⁴ THÉRY, I: ‘Anonymat des dons d’engendrement, filiation et identité narrative des enfants au temps du démariage’ en *Revista de Antropología Social* 2009, nº 18, pp. 25-26.

⁷⁵ «BOE» núm. 162, de 8 de julio de 1999.

precepto ser inconstitucional *‘en la hipótesis de impedir, sin razón o justificación alguna, la investigación de la paternidad’*. Además, el Tribunal sitúa la acción de reclamación de la paternidad en un ámbito distinto al de la revelación de la identidad del progenitor del nacido mediante el uso de estas técnicas. Con la primera lo que se pretende es crear un vínculo jurídico paterno-filial. En el segundo caso, se habla de una determinación meramente identificativa, que no pretende la creación de ese vínculo jurídico que abarque los derechos y obligaciones que le son propios. Se ampara el Tribunal también en que el hecho de que las donaciones sean anónimas no supone la imposibilidad absoluta de la determinación de la identidad, pues el precepto observa que se puedan obtener ciertas informaciones generales y, de forma excepcional, podrá revelarse la identidad siempre que sea indispensable en los términos establecidos. Consideró además que no puede afirmarse que se produzca una desprotección de los hijos preservando la identidad de los donantes, y que mediante esta intimidad que se le concede al donante se favorece el acceso a este tipo de técnicas orientadas a fines terapéuticos y a combatir la esterilidad.

Se debe tener también en cuenta que la inscripción en el Registro Civil en ningún caso *«reflejará datos de los que se pueda inferir el carácter de la generación»* (art.7.2 LTRHA) y que el equipo médico tiene la obligación de intentar garantizar la mayor semejanza posible fenotípica e inmunológica de las muestras de las que dispone con la mujer receptora (art.6.5 LTRHA)⁷⁶. Esto supone que el hijo nacido mediante este tipo de técnicas no tiene forma de saberlo si quienes acudieron a ellas no se lo revelan.

Recientemente el Tribunal Constitucional portugués en Sentencia 225/2018 de 24 de abril pone fin al anonimato en la donación de gametos, lo cual afecta de manera importante a su ley de reproducción asistida y a la reciente ley de vientres de alquiler. Se recuerda que en una sentencia de 2009 el mismo tribunal aceptó la ocultación de la identidad de los donantes. El tribunal en esta ocasión ha considerado que *‘supone una violación de los derechos a la identidad personal y al desarrollo de la personalidad’* y además tratan de justificarlo alegando el progresivo reconocimiento del derecho a acceder a los datos sobre el propio origen que se está produciendo en Europa. Hay quienes afirman, como Montse Boada (miembro del Comité de Bioètica de Catalunya), que esa tendencia tarde o temprano llegará a España. Entre los problemas que se están planteando con ocasión de la mencionada sentencia, existen dudas y confusión acerca de su

⁷⁶ ORDÁS ALONSO, M: ‘El parto anónimo a debate’, ob. cit., p. 12.

aplicación retroactiva y también en relación con las medidas a tomar en los procesos que ya están en curso a lo que el Consejo Nacional de Procreación Médicamente Asistida ha decretado la suspensión de los procesos. Veremos que irá pasando durante el periodo de transición, pero lo que sí que se prevén son consecuencias tales como la disminución de las donaciones, los retrasos en los procesos y unos mayores costes.⁷⁷

3.2.2. Especial tratamiento de la gestación por sustitución

El contrato de gestación por sustitución es nulo en nuestro ordenamiento, como se establece en la LTRHA, que nos recuerda además que la filiación viene determinada por el parto⁷⁸. No con esta previsión se ha conseguido evitar que parejas españolas, tanto heterosexuales como homosexuales, acudan a este tipo de técnicas en el extranjero. No es posible saber con exactitud el número de niños que llegan a España nacidos por esta técnica, pero se estima por la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia que puede ser superior a 1000 al año⁷⁹.

Los intervinientes en el negocio van a ser la mujer gestante y la parte comitente, siendo ésta última la que realiza el encargo, y que podrá ser una persona sola (hombre o mujer), una pareja (matrimonial o no) o una persona que actúe a cuenta de un tercero. La prestación de este tipo de contratos vendría a ser bien el sometimiento a las TRHA para engendrar y gestar un hijo con óvulo propio y con espermatozoides del comitente, de un donante o del propio marido de la gestante o bien que la mujer ponga a disposición su útero para la implantación de un blastocito e incubar un embrión ajeno fruto de los gametos femeninos de la contratante o de una donante y de los gametos masculinos del contratante

⁷⁷ https://elpais.com/internacional/2018/05/04/actualidad/1525441874_746615.html

<http://www.lavanguardia.com/vida/20180507/443323252854/donacion-ovulos-semen-anonimato-portugal.html>

<http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2018/05/01/5ae8377ae2704ea6578b4645.html>

⁷⁸ Art.10 «1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. 2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. 3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales.»

⁷⁹ <http://www.elmundo.es/sociedad/2017/03/05/58bbe43cca4741c1428b4579.html>

o donante. Y ello, con la finalidad de posibilitar la determinación de la filiación a favor del sujeto comitente, renunciando la parte gestante a la determinación de su maternidad.⁸⁰

Pese a la nulidad hay que proceder a determinar la filiación. En estos casos, la filiación materna siempre va a quedar determinada por el parto, siendo la comitente aportadora del material genético considerada en estos casos como una donante. En cuanto a la filiación paterna vendrá determinada conforme a las reglas del consentimiento a la aplicación de este tipo de técnicas y en función de la aportación de su material genético, salvo que se trate de un donante, en los términos que se establecen en la LTRHA; y con lo previsto el apartado tercero del Art.10 LTRHA^{81 82}. Por tanto, mientras que el criterio biológico puede determinar la filiación paterna del comitente, para el caso de la mujer comitente no gestante que haya aportado su material genético no hay posibilidad de establecer la filiación natural conforme a las reglas de nuestro ordenamiento.

4. LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL RECIEN NACIDO

Para asegurar la identidad de una persona se debe partir de la correcta identificación del recién nacido en el momento de su nacimiento, para su posterior inscripción en el Registro Civil⁸³. El hecho de identificar correctamente al recién nacido después del parto constituye no solo un derecho y una garantía de seguridad para éste y para su familia, como veremos, sino también un deber de los servicios de salud y del personal sanitario⁸⁴. Por ello, el método empleado para ello deberá ser garante de fiabilidad y seguridad.

⁸⁰ FERRER VANRELL, M^a P. en '*Comentarios Científico-Jurídicos a la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida*', ob.cit., pp. 160-161.

⁸¹ «*Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales*».

⁸² FERRER VANRELL, M^a P. en '*Comentarios Científico-Jurídicos a la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida*', ob. cit., pp. 162 a 164.

⁸³ GÓMEZ BENGOCHEA, B: '*Derecho a la identidad y filiación*', ob. cit., p.105.

⁸⁴ SANZ DÍAZ, M^a C / ESPINAL RAMÓN, M^a I / DOMÍNGUEZ LUNA, A / FERNÁNDEZ MUÑOZ, S / CARDESA SABIO, F / HERNÁNDEZ PRIETO, M: '*La identificación del recién nacido: asignatura pendiente*' en *Matronas Prof.* 2012; 12 (3-4): pp. 66-69

Además, va a ser necesario, al margen de un adecuado método de identificación del hijo respecto de su madre, un sistema de custodia y salvaguarda que proporcione a dicha técnica una mayor seguridad, fomentando, en la medida de lo posible la no separación entre el niño y la madre. Todo ello para evitar intercambios en la sala de parto, en los nidos o en las salas de hospitalización de obstetricia, para permitir la verificación de la identidad del recién nacido de manera rápida en caso de duda, para comprobar la identidad del recién nacido y de su madre en el momento del alta y también para evitar consecuencias legales al personal sanitario⁸⁵ ante posibles intercambios de bebés⁸⁶. También se pretende con ello evitar el tráfico ilícito de niños⁸⁷.

La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996, en su artículo tercero, nos remite a la Constitución y los Tratados en los que España sea parte, haciendo especial referencia la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño de 1989, que en sus artículos 7 y 8 ha venido reconociendo el derecho de todo niño a ser identificado e inscrito desde su nacimiento. Sobre la base de estos artículos de la Convención de los Derechos del Niño y también sobre la de los artículos 2, 3, y 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclaman el derecho fundamental del hombre al reconocimiento de su personalidad jurídica, se dictó la Orden 15 de noviembre de 1996 de modificación del modelo oficial de cuestionario para la declaración del nacimiento en el Registro Civil⁸⁸, que entró en vigor el 1 de enero de 1997, y que incorporó por primera vez un recuadro para recoger las huellas de la mano del recién nacido⁸⁹ cuando cualquier norma general del Estado o autonómica así lo impusiera de cara a garantizar su identidad. Tiempo después, la Orden Ministerial de 10 de noviembre de 1999 sobre cuestionario para la declaración de nacimiento en el Registro Civil, no solo suprimió la posibilidad de

⁸⁵ Art.220.5 del Código Penal («BOE» núm. 281, de 24/11/1995): «Las sustituciones de un niño por otro que se produjeran en centros sanitarios o sociosanitarios por imprudencia grave de los responsables de su identificación y custodia, serán castigadas con la pena de prisión de seis meses a un año».

⁸⁶ ORTIZ, J / RODRIGUEZ-MIGUÉLEZ, J: '*Identificación y custodia del recién nacido*' Asociación Española de Pediatría 2008.

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/4_2.pdf p. 36.

⁸⁷ GÓMEZ BENCHOECHEA, B: '*Derecho a la identidad y filiación*', ob. cit., p. 106.

⁸⁸ «BOE» núm. 285, de 26 de noviembre de 1996

⁸⁹ Algunas Comunidades Autónomas, en uso de sus competencias en sanidad, ya habían establecido un documento de identidad infantil que recogía las huellas dactilares del recién nacido, por lo que también parecía oportuno que las misas figurasen en el cuestionario para el Registro Civil.

que la madre pudiera ocultar su maternidad, sino que introdujo, además, dos recuadros en blanco destinados a recoger las huellas dactilares de la madre para terminar de reforzar la identidad biológica del nacido. En consonancia con esta última Orden, en marzo del año 2000, INSALUD generalizó en sus hospitales la medida⁹⁰.

La regulación en materia de identificación de los recién nacidos la vamos a encontrar fundamentalmente en las leyes autonómicas, dentro del marco de sus competencias en sanidad, pero también el derecho a la identidad queda en este sentido protegido a través de la normativa registral.

4.1. Métodos de identificación

Los métodos clásicos utilizados en la identificación de los recién nacido han venido siendo la huella dactilar o plantar y los brazaletes identificativos (o sistema de codificación neonatal). Podemos definir como dactilograma '*el estudio de la impresión de las crestas y surcos papilares de las yemas digitales*' (quirograma en el caso de las palmas de las manos). Se puede realizar mediante escáner digital o mediante la impresión con tinta de un tampón comercial en una hoja de papel blanco⁹¹. En cuanto a los brazaletes identificativos, se coloca uno en la muñeca de la madre antes del parto, y nada más producirse éste se colocará otro en el tobillo o en la muñeca del recién nacido, así como en la pinza del cordón umbilical; todos ellos deberán contener un mismo código (idéntico y exclusivo para cada niño), que deberá ser comprobado en la sala de partos, cada vez que se produzca la separación física entre madre e hijo, y en el momento del alta hospitalaria. También se deberá colocar una pegatina con idéntico código en el partograma. Si se trata de gestaciones múltiples se abrirá un equipo distinto por cada neonato, y para el caso de partos simultáneos algunos equipos poseen colores diferentes⁹².

⁹⁰ https://elpais.com/diario/2000/01/13/sociedad/947718005_850215.html

⁹¹ SANZ DÍAZ, M^a C / ESPINAL RAMÓN, M^a I / DOMÍNGUEZ LUNA, A / FERNÁNDEZ MUÑOZ, S / CARDESA SABIO, F / HERNÁNDEZ PRIETO, M: 'La identificación del recién nacido: asignatura pendiente', Ob. Cit., p.67.

⁹² ORTIZ, J / RODRIGUEZ-MIGUÉLEZ, J: '*Identificación y custodia del recién nacido*' ob. cit. p 37

En la actualidad, comienza a existir una tendencia hacia la toma de muestras de material biológico de la madre y el neonato, que mediante un análisis ADN de las muestras secas de sangre permite comparar ambas garantizando la llamada '*verdad biológica*'⁹³. No requiere ni utensilios ni personal ajeno o especializado al propio de la asistencia al parto, y tras realizar las muestras no habría que hacer nada más salvo en el caso de que se planteara el cotejo del niño⁹⁴.

Las técnicas de identificación neonatal, que se realizan siempre por comparación, debieran cumplir requisitos tales como '*la inmutabilidad, la fiabilidad y la posibilidad de estandarización*'. Tanto el método de las huellas dactilares como el estudio del ADN pueden cumplir tales requisitos, pero de manera cualitativamente distinta⁹⁵.

Haciendo un estudio comparativo de la fiabilidad del método clásico de identificación a través de la huella dactilar frente al análisis del ADN se han extraído las siguientes conclusiones: El análisis de ADN constituye un método plenamente seguro, fiable y fácil de llevar a cabo, mientras que la identificación mediante las huellas dactilares, tal y como se están realizando las improntas⁹⁶, no resultan tan fiables, pues requieren ser realizadas por profesionales cualificados para aportar una mayor fiabilidad; además de que las condiciones del neonato hacen cuestionable que hasta un experto pueda realizarlas de forma adecuada. Y, en cuanto a los costes, la recogida de sangre y la recogida de muestras

⁹³ SANZ DÍAZ, M^a C / ESPINAL RAMÓN, M^a I / DOMINGUEZ LUNA, A / FERNÁNDEZ MUÑOZ, S / CARDESA SABIO, F / HERNÁNDEZ PRIETO, M: 'La identificación del recién nacido: asignatura pendiente', Ob. Cit., p. 67.

⁹⁴ RODRIGUEZ-ALARCÓN GÓMEZ, J: 'El ADN en la identificación del recién nacido' en Anales Españoles de Pediatría, 1997; 46:322-324, pp.322 a 324

⁹⁵ LORENTE, JA / LORENTE, M: 'El ADN y la identificación en la investigación criminal y en la paternidad biológica', Ed. Comares, Granada, 2005 en RODRIGUEZ-ALARCÓN GÓMEZ, J: 'El ADN en la identificación del recién nacido'

⁹⁶ El pediatra Antonio Garrido-Lestache, promotor del sistema de identificación del recién nacido por dactiloscopia, considera esta técnica del todo eficaz, pero considera que se están produciendo constantes errores en los hospitales españoles dado que, la identificación se lleva a cabo por profesionales no preparados y los instrumentos empleados (como tinta, papel y lupa) no son lo suficientemente buenos. Propone solucionar el problema a través de docencia y preparación, mediante una técnica que permita hacerlo adecuadamente.

<https://www.larazon.es/atusalud/salud/antonio-garrido-lestache-las-maternidades-en-espana-no-cumplen-las-leyes-de-identificacion-LH17890812>

en papel (no la impresión de huellas en escáner digital) resultan baratas; el coste del análisis del ADN sí que sería superior al requerido para un estudio de las huellas, pero se podría justificar su uso dada la baja incidencia de casos que lo requerirían ⁹⁷. Se debe tener en cuenta que el ADN es inalterable, mientras que las huellas pueden ser alteradas de manera intencional, casual o accidental. Además, el ADN ha demostrado ser resistente a la baja calidad de sus muestras, resultando válidas en ocasiones, aun siendo muy defectuosas, mientras que las huellas, que requieren tomarse con mucha perfección, después deben de ser mantenidas en condiciones de legibilidad⁹⁸.

El Comité de Estándares de la Sociedad Española de Neonatología considera que actualmente el método más fiable es la combinación del codificador neonatal junto con las muestras de ADN de la madre y el niño, que solo serán analizadas en los casos de duda sobre la identidad⁹⁹. País Vasco es pionero en España y Europa en combinar ambos métodos, viene haciéndolo desde 1998¹⁰⁰. A este sistema se han ido sumando las Comunidades de Cantabria¹⁰¹, Murcia¹⁰² y Andalucía¹⁰³.

4.2. Normativa estatal

El nacimiento constituye el primer hecho inscribible en el Registro Civil en la vida de una persona conforme al artículo 4 de la LRC, y aparece regulado en el Capítulo I del Título VI de la Ley.

⁹⁷ SANZ DÍAZ, M^a C / ESPINAL RAMÓN, M^a I / DOMINGUEZ LUNA, A / FERNÁNDEZ MUÑOZ, S / CARDESA SABIO, F / HERNÁNDEZ PRIETO, M: 'La identificación del recién nacido: asignatura pendiente', Ob. Cit., p. 72.

⁹⁸ RODRIGUEZ-ALARCÓN GÓMEZ, J: 'El ADN en la identificación del recién nacido' ob. cit., pp. 332 a 324

⁹⁹ <https://www.analesdepediatría.org/es-recomendaciones-identificacin-inequoca-del-recin-articulo-S1695403317301534>

¹⁰⁰ https://elpais.com/diario/1998/10/02/paisvasco/907357214_850215.html

¹⁰¹ <https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201505/11/valdecilla-refuerza-sistema-identificacion-20150511000959-v.html>

¹⁰² <http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=183163&idsec=4974>

¹⁰³ <http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hinmaculada/web/servicios/tcg/documentos/consentimientos%20informados/OBSTETRICIA/Muestra%20sangre%20RN.pdf>

La Ley 19/2015, de 13 de julio, de Medidas de Reforma Administrativa en el Ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil¹⁰⁴ atendiendo a la alarma social causada por los casos conocidos como ‘*bebés robados*’¹⁰⁵, recalcó la importancia de la seguridad y fiabilidad en la identificación de los recién nacidos, modificando así, a través de su artículo segundo, la redacción de los artículos 44 y 46¹⁰⁶ de la LRC de 2011, estableciendo de manera más precisa las pautas para asegurar y garantizar la inequívoca identificación. Bien es cierto que la trama de los ‘*bebés robados*’, ocurrió en otros tiempos, en los que en los hospitales no se tomaban las medidas de seguridad que se están tomando en la actualidad, pero, aun en nuestros días, aunque de manera bastante excepcional, se han seguido produciendo errores de identificación, de manera involuntaria, provocando el intercambio o confusión de bebés¹⁰⁷, con lo cual se pone de relieve una vez más la importancia de una normativa y un sistema que permita identificar de manera indubitada al recién nacido con su madre.

La inscripción de nacimiento deberá contener la siguiente información conforme se establece en el art.44 LRC: *«hecho, fecha, hora y lugar del nacimiento, identidad, sexo y, en su caso, filiación del inscrito»*. Esta inscripción se practicará *«en virtud de declaración formulada en documento oficial debidamente firmado por el o los declarantes»*, y deberá ser acompañada del correspondiente parte facultativo¹⁰⁸. Se añade con la modificación, que quien asista al nacimiento, deberá comprobar la identidad de la madre y del recién nacido¹⁰⁹.

¹⁰⁴ «BOE» núm. 167, de 14 de julio de 2015.

¹⁰⁵ La Asociación ‘SOS Bebés Robados’ estima que unos 300.000 recién nacidos fueron sustraídos entre los años 1940 y 1960 en nuestro país.

https://www.abc.es/sociedad/abci-limbo-bebes-robados-201807010244_noticia.html

¹⁰⁶ Entrada en vigor el 15 de octubre de 2015

¹⁰⁷ En el año 2013 un hospital de Málaga intercambia por error a dos bebés recién nacidos.

<https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2013/12/12/hospital-malaga-intercambia-error-bebes/792264.html>

¹⁰⁸ El Art.45 LRC establece quienes son los obligados a promover la inscripción de nacimiento.

¹⁰⁹ *«A tal fin, el médico, el enfermero especialista en enfermería obstétrico-ginecológica o el enfermero que asista al nacimiento, dentro o fuera del establecimiento sanitario, comprobará, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, la identidad de la madre del recién nacido a los efectos de su inclusión en el parte facultativo»*.

En cuanto al art.46, con anterioridad solo exigía que el personal sanitario que asistiera el nacimiento adoptara las cautelas necesarias para asegurar la identificación y efectuara las comprobaciones reglamentarias para establecer la filiación; la actual redacción es más precisa: *«El personal sanitario que asista al nacimiento deberá adoptar, bajo su responsabilidad, las cautelas necesarias para asegurar la identificación del recién nacido y efectuará las comprobaciones que establezcan de forma indubitada la relación de filiación materna, incluyendo, en su caso, las pruebas biométricas, médicas y analíticas que resulten necesarias para ello conforme a la legislación reguladora de las historias clínicas»*. Otra novedad que se incorpora es que deberán tomarse, en todo caso, las huellas plantares del recién nacido y las dactilares de la madre para que consten en el mismo documento, debiendo constar la realización de las pruebas en la inscripción practicada en el Registro¹¹⁰. Curiosamente, se exigen las huellas plantares, y no dactilares, del recién nacido, cuya fiabilidad se sabe que no supera el 25% frente al 80% de las huellas dactilares.¹¹¹

Pese a que ahora la normativa registral hace más hincapié en el asunto, se sigue observado cierta insuficiencia para asegurar el derecho a la identidad, pues su grado de protección varía entre las distintas Comunidades Autónomas, ya que son estas quienes en mayor o menor medida se encargan de regularlo en el marco de sus competencias. Como se ha podido ver, a nivel estatal, solo exige la toma de huellas plantares del recién nacido y dactilares de la madre, que, como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, no está cumpliendo las condiciones adecuadas de seguridad y fiabilidad.

¹¹⁰ *«En todo caso se tomarán las dos huellas plantares del recién nacido junto a las huellas dactilares de la madre para que figuren en el mismo documento. En la inscripción que del nacimiento se practique en el Registro Civil se hará constar la realización de dichas pruebas y el centro sanitario que inicialmente conserve la información relacionada con las mismas, sin perjuicio del traslado de esta información a los archivos definitivos de la administración correspondiente cuando proceda»*.

¹¹¹ Las huellas dactilares no cambian nunca, ofrecen más puntos para analizar y son más sencillas de obtener, mientras que las huellas plantares solo resultan útiles los primeros meses y tan solo para distinguir al neonato del resto de neonatos de la clínica.

<https://garrido-lestache.es/identificacion.htm>

https://elpais.com/diario/1999/06/19/madrid/929791464_850215.html

5. REGULACIÓN AUTONÓMICA DEL DERECHO A LA IDENTIDAD

La regulación autonómica juega un papel importante. La protección del menor está delegada en las distintas Comunidades Autónomas. Hemos visto como la legislación estatal se refería a las cuestiones relacionadas con el registro del nacimiento y la adopción, así como a la conservación registral de los datos originarios del adoptado. Pues bien, va a ser la legislación de cada Comunidad Autónoma la que se va a referir a las cuestiones administrativas y a la posibilidad de conocer los datos que estén en su poder, por ser ésta la encargada tanto de la protección del menor como de los procedimientos de adopción¹¹². Además, en lo relativo a la identificación de los recién nacidos algunas Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias en sanidad, también han legislado en esa materia.

5.1. Andalucía

En lo que se refiere a la identificación de los recién nacidos, el art.5 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor¹¹³ establece que se deben establecer las garantías necesarias para la inequívoca identificación de estos, siendo la administración andaluza quien deberá adoptar las medidas necesarias cuando no se haya efectuado la inscripción del nacimiento por los obligados legalmente a ello. Además, el Decreto 246/2005, de 8 de noviembre, por el que se regula el ejercicio del derecho de las personas menores de edad a recibir atención sanitaria en condiciones adaptadas a las necesidades propias de su edad y desarrollo, crea el Consejo de Salud de las Personas Menores de Edad¹¹⁴ y en su art.10, relativo a la identificación de los menores de edad, enuncia el derecho de estos a que sea respetada su identidad y garantizada su identificación, estableciendo también que en los centros hospitalarios deberá existir un procedimiento con plenas garantías para la identificación de los recién nacidos durante su permanencia en el ámbito sanitario, y que tras el parto se procederá, en presencia de

¹¹² GÓMEZ BENGOCHEA B: '*Derecho a la identidad y filiación*', ob. cit., pp. 234-239.

¹¹³ «BOE» núm. 150, de 24 de junio de 1998, páginas 20689 a 20702.

¹¹⁴ «BOJA» núm. 244, de 16 de diciembre de 2005.

testigo, a la aplicación del sistema de identificación del nacido con su madre y, en el caso de que sea necesario, se hará uso del sistema de registro de pruebas biológicas.

La Ley 1/2009 de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía¹¹⁵, establece que podrán ser objeto de mediación los conflictos que puedan surgir con ocasión de la búsqueda de orígenes entre el adoptado, la familia biológica y los adoptantes.

5.2. Aragón

La Ley 12/2001, de 2 de julio de la Infancia y la Adolescencia¹¹⁶, reconoce en su art.10 el derecho a la identificación de los recién nacidos.

El art.5.2. g) de la Ley 9/2011, de 24 de marzo de Mediación Familiar¹¹⁷, establece que podrán ser objeto de mediación los datos de los adoptados relativos a sus orígenes biológicos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico; pero en su párrafo segundo nos encontramos con que el derecho a conocer los orígenes del art.180.6 del CC no se hace del todo efectivo, al establecerse que no se podrá facilitar la identidad de los padres biológicos sin su autorización expresa, salvo en aquellos casos justificados en los que exista un peligro para la vida o integridad del adoptado.

5.3. Asturias

La Ley 1/1995, de 27 de enero, de Protección del Menor¹¹⁸, se remite en su art.7 al ordenamiento jurídico en su conjunto, haciendo especial referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989.

Su Ley 3/2007, de 23 de marzo, de Mediación Familiar¹¹⁹ también prevé la mediación en las relaciones entre adoptados, familia biológica y padres adoptivos.

¹¹⁵ «BOJA» núm. 50, de 13 de marzo de 2009.

¹¹⁶ «BOA» núm. 86 de 20 de julio de 2001.

¹¹⁷ «BOE» núm. 115, de 14 de mayo de 2011.

¹¹⁸ «BOE» núm. 94, de 20 de abril de 1995.

¹¹⁹ «BOPA» núm. 81, de 9 de abril de 2007.

5.4. Cantabria

Aparece expresamente reconocido el derecho a la identidad en el art.15 de la Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de Garantía de Derechos y Atención a la Infancia y la Adolescencia¹²⁰. Corresponderá a la Comunidad Autónoma establecer las garantías necesarias para la adecuada identificación en el momento del nacimiento, adoptar las medidas necesarias para la inscripción en el Registro Civil en caso de que los obligados a promover ésta no lo hagan, y, por último, prestar asistencia y protección cuando el menor sea privado de alguno o todos los elementos de su identidad. En su segundo apartado se refiere al deber de las administraciones cántabras de velar por la conservación de los datos relativos a los orígenes del menor; y en su apartado tercero se refiere al derecho y obligación de los menores extranjeros de conservar la documentación acreditativa de su identidad, sin que puedan ser privados de ella (salvo lo dispuesto en las leyes de extranjería). En su art.40, reconoce el derecho al acceso al expediente y a conocer los propios orígenes, estableciendo como limitaciones las derivadas de la necesidad de mantener el anonimato de las personas denunciante de la situación de desprotección, y respetando siempre la legislación en materia de adopción.

Por otro lado, el Decreto 23/2007, de 1 de marzo, sobre los derechos de la madre, el padre y el recién nacido en relación con el nacimiento en el ámbito sanitario¹²¹ contiene las siguientes previsiones: Es un derecho de la madre tener al recién nacido a su lado desde que hace hasta que finaliza la estancia hospitalaria, si la salud de ambos lo permite (art.2.3.c.2º); es un derecho del recién nacido el no ser separado de su madre en ningún momento, salvo causa justificada (art.3.b.3º); también tiene derecho el recién nacido, en caso de que su madre no esté en condiciones de ello, estar desde el nacimiento acompañado por el padre o persona que lo sustituya; el niño además tiene derecho a ser correctamente identificado en el momento del parto, con el objeto de preservar su derecho a la identidad y evitar su intercambio y su tráfico ilícito (art.3.b.5º).

De la Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria¹²² podríamos extraer del art.4 (según el cual podrán ser objeto de mediación las materias de libre disposición) y del art.21 (sobre los legitimados, que hace referencia

¹²⁰ «BOE» núm. 19, de 22 de enero de 2011.

¹²¹ «BOC» núm. 54, de 16 de marzo de 2007.

¹²² «BOE» núm. 99, de 26 de abril de 2011.

también a los menores) que sería un posible cauce para los conflictos que puedan surgir en los términos ya vistos en lo que se refiere al conocimiento de los orígenes biológicos.

5.5. Castilla La Mancha

La actual Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia¹²³, recoge en su art.91 el derecho de los menores a conocer sus orígenes biológicos a través de las medidas adecuadas, refiriéndose particularmente a un procedimiento confidencial de mediación; también, recoge el deber de la administración de la Comunidad Autónoma de asegurar la conservación de la información relativa a los orígenes del menor. La Ley 1/2015, de 12 de febrero, del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar de Castilla-La Mancha¹²⁴ con ocasión de lo establecido en el art.91, incluye en su art.3.e, como objeto de mediación, aquellos conflictos relativos al ejercicio del derecho a conocer los orígenes biológicos o los conflictos surgidos entre la familia adoptante y la biológica cuando afecten a menores de edad.

A través de la Ley 5/2014, de 9 de octubre, se derogó la anterior Ley 3/1999, de 31 de marzo, del Menor¹²⁵, que sí reconocía en su art.9 la protección del derecho a la identidad a través de la adecuada identificación del recién nacido.

5.6.Castilla León

La Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción y Atención a la Infancia¹²⁶, reconoce expresamente el derecho a la identidad en su art.14, en el cual se refiere a la correcta identificación de los recién nacidos, así como al derecho a conocer los propios orígenes. Su art.45.k recoge el derecho del menor a conocer su historia personal y familiar, así como los antecedentes sociales y culturales de su familia de origen, y, además, reconoce el derecho, alcanzada la mayoría de edad, de acceder a su expediente y conocer sus orígenes, incluyéndose la identidad de su madre biológica; para hacer efectivos estos derechos, el art.108 establece que los servicios de mediación dispensarán el apoyo

¹²³ «BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2015, páginas 13217 a 13258.

¹²⁴ «BOE» núm. 148, de 22 de junio de 2015, páginas 51671 a 51687.

¹²⁵ «DOCM» núm. 22 de 16 de abril de 1999.

¹²⁶ «BOCL» núm. 145 de 29 de Julio de 2002.

necesario para su ejercicio y facilitarán la mediación para el encuentro con su familia biológica.

Para hacer efectivo el derecho a la búsqueda de orígenes, el Decreto 37/2005, de 12 de mayo, por el que se regulan los procedimientos administrativos en relación con la adopción de menores¹²⁷, incluye en su ámbito de aplicación la mediación profesional en el ejercicio de este derecho (ar.2.2). Sin embargo, la Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar¹²⁸ no recoge expresamente la mediación en este ámbito, pero podría enmarcarse entre los conflictos objeto de mediación familiar.

5.7. Cataluña

Es destacable la legislación catalana en materia de adopción y búsqueda de orígenes. El Código Civil Catalán¹²⁹ en su artículo 235-50 establece el deber de los padres adoptantes a comunicarle al hijo su condición de adoptado, siempre que no sea contraria al interés del menor, y cuando este adquiera suficiente madurez o como máximo cuando cumpla 12 años. Además, esta Comunidad, a través de la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de Derechos y Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia¹³⁰, en su artículo 30 expresamente recoge el derecho a la identidad personal de los niños y adolescentes; y no solo eso, sino que en su apartado 2 también establece el derecho de estos a conocer su origen genético, y a sus padres y parientes biológicos. El Decreto 169/2015, de 21 de julio, por el que se establece el procedimiento para facilitar el conocimiento de los orígenes biológicos¹³¹, se crea con el objetivo de facilitar a las personas adoptadas la ayuda necesaria para iniciar la búsqueda de sus orígenes.

También la Ley 15/2009, de 22 de julio, de Mediación en el ámbito de Derecho Privado¹³², en su artículo 2.1. d) prevé expresamente un procedimiento de mediación con

¹²⁷ «BOCyL» núm. 95, de 19 de mayo de 2005.

¹²⁸ «BOE» núm. 105, de 3 de mayo de 2006, páginas 17034 a 17041.

¹²⁹ «BOE» núm. 203, de 21 de agosto de 2010.

¹³⁰ «BOE» núm. 156, de 28 de junio de 2010.

¹³¹ «DOGC» núm. 6919 de 23 de julio de 2015.

¹³² «DOGC» núm. 5432, de 30 de julio de 2009.

ocasión de haber ejercido el derecho a conocer los datos biológicos entre el adoptado y su familia biológica o entre sus padres biológicos y adoptivos.

5.8. Extremadura

En su Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de Protección y Atención a Menores¹³³, no encontramos ninguna referencia al derecho a la identidad. Y, tampoco en su Decreto 5/2003, de 14 de enero por el que se establece el procedimiento de valoración de las solicitudes de adopción y acogimiento familiar y de selección de adoptantes y acogedores¹³⁴.

5.9. Galicia

Ley 3/2011, de 30 de junio, de Apoyo a la Familia y a la Convivencia de Galicia¹³⁵, en su art.42 se remite tanto a la Constitución, como a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Carta Europea de los Derechos del Niño. Reconoce el derecho desde el nacimiento a un nombre y a una nacionalidad, y además establece que los centros sanitarios en que se produzcan nacimientos o se operen TRHA deberán disponer de las garantías para asegurar la inequívoca identificación de las personas nacidas o concebidas (art.42.b). El mismo artículo en su letra c), reconoce el derecho a una identidad propia y a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos, además del deber de las autoridades públicas gallegas de conservar la información relativa a los orígenes del niño. El derecho al nombre, a la nacionalidad y a la preservación de la identidad a través de la adecuada identificación de los recién nacidos, ya venía reconociéndose en la anterior y derogada Ley 3/1997, de 9 de junio, gallega de la Familia, la Infancia y la Adolescencia¹³⁶.

¹³³ «BOE» núm. 309, de 27 de diciembre de 1994, páginas 38791 a 38795.

¹³⁴ «DOE» núm. 14, de 1 de febrero de 2003.

¹³⁵ «DOG» núm. 134, de 13 de julio de 2011.

¹³⁶ «DOG» núm. 118, de 20 de junio de 1997.

5.10. Islas Baleares

La Ley 7/1995, de 21 de marzo, de Guarda y Protección de los Menores Desamparados¹³⁷, destaca la importancia del art.39 CE en su exposición de motivos además de remitirse a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989.

La Ley de Mediación Familiar de las Illes Balears 14/2010, de 9 de noviembre¹³⁸, enumera entre las materias que podrán ser objeto de mediación las cuestiones relativas a la adopción (art.4.3.f), además de incluir en las personas legitimadas para solicitar la mediación familiar a las familias biológicas, familias adoptantes y a los adoptados (art.5.1.g).

5.11. Islas Canarias

En el art.3 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores¹³⁹, se remite, en relación con los derechos del menor, a la CE, los tratados, pactos y convenios internacionales ratificados por España, haciendo especial referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y a la Carta Europea de Derechos del Niño.

La Ley de Mediación Familiar de Canarias, 15/2003, de 8 de abril¹⁴⁰, modificada por la Ley 3/2005, de 23 de junio¹⁴¹, establece en su art.3 que podrán ser objeto de mediación los conflictos familiares que puedan surgir entre las personas adoptadas y sus familias biológicas o adoptivas.

¹³⁷ «BOIB» núm. 43, de 08 de abril de 1995.

¹³⁸ «BOE» núm. 16, de 19 de enero de 2011, páginas 6169 a 6182.

¹³⁹ «BOE» núm. 63, de 14 de marzo de 1997, páginas 8376 a 8397.

¹⁴⁰ «BOE» núm. 134, de 5 de junio de 2003, páginas 21879 a 21883.

¹⁴¹ «BOE» núm. 177, de 26 de julio de 2005, páginas 26485 a 26486.

5.12. La Rioja

En La Rioja, la Ley 1/2006 de Protección de Menores¹⁴² en su art.93.2 establece que la Comunidad Autónoma deberá asegurar la información sobre los orígenes del menor de la que disponga. Con anterioridad, la derogada Ley 4/1998 de 18 de marzo, del Menor¹⁴³, reconocía expresamente el derecho a la identidad y el derecho a conocer su ascendencia familiar.

5.13. Madrid

A través del art.11.1.a) de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia¹⁴⁴, se recoge el derecho a ser correctamente identificados en su nacimiento, de acuerdo con los métodos más avanzados y precisos, mediante el llamado ‘Documento de Identificación Infantil’. También el art.52.1.a) de la misma ley se refiere al derecho a la identidad del menor estableciendo que la administración autonómica deberá velar por este, instando la correspondiente inscripción cuando quienes se hallen obligados a promoverla no lo hicieren.

La Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid¹⁴⁵ prevé también la mediación como cauce en la búsqueda de orígenes del adoptado para facilitar el encuentro o relaciones posteriores entre la familia adoptante, el adoptado y su familia biológica.

5.14. Murcia

El derecho a la identidad aparece recogido en el art.7 de la Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia en la Región de Murcia, que reconoce el derecho al nombre y a la nacionalidad, así como el deber de registrar a todo niño desde su nacimiento; también incluye que las maternidades de la región deberán disponer de un adecuado sistema de

¹⁴² «BOR» n° 33, de 9 de marzo de 2006.

¹⁴³ «BOE» núm. 79, de 2 de abril de 1998, páginas 11230 a 11243.

¹⁴⁴ «BOE» núm. 183, de 2 de agosto de 1995, páginas 23670 a 23688.

¹⁴⁵ «BOCM» núm. 54, de 5 de marzo de 2007.

identificación del recién nacido respecto de sus padres biológicos para preservar su identidad y así evitar su intercambio y tráfico ilícito.

5.15. Navarra

Su Ley Foral 12/2005, de 5 de diciembre, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia¹⁴⁶, garantiza el derecho a la identidad de los menores amparando las garantías para la inequívoca identificación de los recién nacidos.

5.16. País Vasco

País Vasco, en su Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar¹⁴⁷, prevé el procedimiento confidencial de mediación, en su art.5.3., en el supuesto de que las personas adoptadas ejerzan su derecho al acceso de la información sobre su filiación biológica. También, la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia¹⁴⁸, reconoce expresamente en su art.11 el derecho a la identidad, y el deber de los poderes públicos de facilitar el acceso a la información sobre la filiación de orígenes de los adoptados en los términos establecidos por el art.84 de la misma ley.

5.17. Comunidad Valenciana

La legislación Valenciana es bastante completa en este aspecto con la entrada en vigor de la Ley 12/2008, de 3 de julio, de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia¹⁴⁹. El art.7.1 hace un reconocimiento genérico de los derechos fundamentales y libertades públicas del menor, remitiéndose a la Constitución, los Tratados Internacionales, y, especialmente, a la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Su art.10 reconoce expresamente el derecho a la identidad, a un nombre digno y a una nacionalidad, para lo cual deberán establecerse suficientes garantías para la inequívoca identificación

¹⁴⁶ «BON» núm. 149 de 14 de diciembre de 2005.

¹⁴⁷ «BOE» núm. 212, de 3 de septiembre de 2011, páginas 95645 a 95661.

¹⁴⁸ «BOE» núm. 274, de 14 de noviembre de 2011, páginas 117217 a 117276.

¹⁴⁹ «DOCV» núm. 5803, de 10 de julio de 2008.

de los recién nacidos. En su art.11 reconoce el derecho al conocimiento de los propios orígenes. Y, a través de su art.36.2 reconoce el derecho del recién nacido a ser correctamente identificado mediante los instrumentos que garanticen ese derecho.

Su Ley reguladora de la Mediación Familiar, 7/2001, de 26 de noviembre, recoge en su art.13.1. b) la mediación como cauce para que los adoptados y su familia biológica puedan ponerse en relación, una vez aceptada la invitación de encuentro por las partes. Además de eso, la ley en su Exposición de Motivos destaca la idoneidad de la mediación como cauce para canalizar el posible encuentro dado el incremento de la demanda en la búsqueda de orígenes de los adoptados; y fue por ello que las Cortes Valencianas en el año 2000 adoptaron un acuerdo por unanimidad de que el Gobierno de la comunidad facilitara el máximo de información necesaria, respetando la ley, los condicionantes psicológicos, familiares y sociales a través de la mediación.

6. ELEMENTOS MUTABLES DE LA IDENTIFICACIÓN

Dentro del elemento estático en la identidad de un sujeto, comúnmente denominado '*identificación*', se encontraban otros caracteres que permitían identificar a un sujeto más allá del puro aspecto biológico. Caracteres que, a diferencia de lo que ocurre con la identificación biológica, sí que pueden sufrir variaciones en determinadas ocasiones.

6.1. El derecho al nombre y apellidos

El nombre y los apellidos son elementos de la identidad del nacido, derivados de la personalidad y que deben de incorporarse a la inscripción del nacimiento. El sistema de identificación está subordinado al interés público, por lo que la regulación en nuestro ordenamiento es de carácter imperativo y va a aparecer limitada la actuación de la autonomía de la voluntad. El nombre tiene por un lado una trascendencia pública como institución Administrativa, pues existe un deber de identificación con arreglo al nombre legal. Pero además se trata de un requisito imprescindible para el desarrollo de la personalidad, pudiendo considerarse como un derecho subjetivo de la personalidad.

Desde el punto de vista privado la doctrina se ha referido a este como un medio de individualización mediante el cual uno proyecta su personalidad socialmente.¹⁵⁰

Nuestra Constitución no contempla el derecho al nombre. No obstante, el Tribunal Constitucional se ha referido a éste en la STC 117/1994 de 25 de abril (FJ 3º)¹⁵¹ como una cualidad definitoria del ser propio y atribuida como posesión inherente e irreductible a toda persona, reconociendo que forma parte de los derechos reconocidos en el artículo 18.1 CE (propia imagen, honor e intimidad personal). A través del nombre se individualiza a cada persona del resto a la par que se permite su identificación personal.

También se refiere nuestro Tribunal Constitucional al derecho al nombre y los apellidos en la STC 167/2013 de 7 de octubre¹⁵², afirmando en su fundamento jurídico 6º que el legislador a la hora de regular el régimen jurídico del derecho al nombre no obvia la protección de otros valores constitucionalmente protegidos tales como *‘la dignidad de la persona (art.10.1 CE), la protección de la familia en general (art.39.1 CE) y de los hijos en particular (art.39.2 CE, así como la seguridad jurídica (art.9.3 CE) en lo que concierne al estado civil de las personas’*, añadiendo que tanto la regulación establecida en los artículos 109 CC y 194 RRC sin duda *‘cumplen con la exigencia de preservar la dignidad de la persona en un aspecto tan personalísimo como lo es su derecho al nombre’*; y, recalca el interés del Estado en dotar al estado civil de estabilidad mediante la fijación inicial de los apellidos y los supuestos en los que se prevé su cambio o alteración. En esta misma sentencia el tribunal se refiere a la STJUE de la Sala 2ª de 22

¹⁵⁰ BERROCAL LANZAROT, A.I: ‘La identidad personal. El nombre y apellidos. El interés superior del menor’ en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, nº 760, marzo 2017, pp. 938-939.

¹⁵¹ «BOE» núm. 129, de 31 mayo de 1994.

¹⁵² «BOE» núm. 267, de 7 de noviembre de 2013, páginas 13 a 22.

de diciembre de 2010, (C-208/09, *Sayn-Wittgenstein*, ap. 52)¹⁵³, además de remitirse a jurisprudencia del TEDH¹⁵⁴ que se pronuncia en el mismo sentido.

El reconocimiento expreso a este derecho lo podíamos encontrar en el artículo 24.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de Nueva York, de 16 de diciembre de 1996, además de en el artículo 7 de La Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989. Actualmente, aparece por primera vez consagrado en la legislación Registral, concretamente en el artículo 50 de la Ley del Registro Civil de 21 de julio de 2011, siendo pacífico en la doctrina que se considere como un derecho de la personalidad. Tanto la Ley del Registro Civil (Título VI, Capítulo I, Sección 2ª, artículos 49 a 57) como el Reglamento del Registro Civil (Título V, Capítulo I, Sección 5ª, artículos 192 a 219) se encargan de regular toda la materia que concierne al nombre y los apellidos¹⁵⁵.

El artículo 50 LRC consagra el derecho de toda persona a un nombre desde su nacimiento, por lo que éste, junto a los apellidos, que vendrán determinados por la filiación, deberán constar en la inscripción de nacimiento (art.49 LRC). La ley prevé la solución para determinar los apellidos en los casos en los que no haya acuerdo entre los progenitores o en los que solo aparezca reconocida una filiación (art.49.2 LRC) y también para determinar tanto el nombre como los apellidos al nacido cuya filiación no sea conocida (art.50.3 LRC).

Si bien los apellidos vienen determinados por la filiación, dice el art.51 LRC que «*el nombre propio será elegido libremente*», dentro de las limitaciones que establece el

¹⁵³ ‘...expresa que el apellido de una persona es un elemento constitutivo de su identidad y de su vida privada, cuya protección está consagrada por el artículo 7 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, así como por el artículo 8 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Aunque el artículo 8 de dicho Convenio no lo mencione expresamente, el apellido de una persona afecta a su vida privada y familiar al constituir un medio de identificación personal y un vínculo con una familia’.

¹⁵⁴ STEDH *Burghartz c. Suiza* de 22 de febrero de 1994 (ap. 24) y *Stjerna c. Finlandia* de 25 de noviembre de 1994 (ap. 3).

¹⁵⁵ LINACERO DE LA FUENTE, M: ‘Derecho a la identidad personal: el nombre y los apellidos’, Derecho Civil I, Ed. Tirant Lo Blanch, 2013, p. 439.

mismo artículo. Ejemplo de una limitación es que no se podrán imponer nombres «*contrarios a la dignidad de la persona ni los que hagan confusa la identificación*».

Tanto el nombre como los apellidos son susceptibles de modificación. El nombre previa declaración del interesado siempre que concurran las circunstancias exigidas en la legislación del Registro Civil (art.52 LRC). Los apellidos podrán modificarse mediante «*declaración de voluntad*» (art.53 LRC), mediante «*expediente*» (art.54 LRC), o si concurren determinadas ‘circunstancias *«excepcionales»* (art.55 LRC), siempre conforme a lo que establezca la legislación registral para ello, y teniendo en cuenta que el cambio podrá alcanzar a otras personas conforme a lo que se establece en el art.57 LRC.

6.2. Derecho a una nacionalidad

La nacionalidad es el estado civil fundamental de la persona, el vínculo jurídico-político que liga a un individuo con un determinado Estado, siendo cada Estado quien posee la potestad de decidir quiénes son o quienes podrán ser sus nacionales a través de sus propias normas. Más allá de eso, la nacionalidad también es concebida en otro sentido como una realidad histórica, cultural y social, denominada Nación, que no necesariamente coincide con la sumisión al Estado como organización política, ya que se trataría desde una perspectiva sociológica como una condición o cualidad de la persona que impone en ésta su sello.¹⁵⁶

Nuestra Constitución dedica su art.11 a la nacionalidad, que se encuadra en el Título I de los derechos y deberes fundamentales, cuya adquisición, conservación y pérdida queda supeditada al principio de reserva de ley; regulación que vamos a encontrar en el Código Civil. Se debe tener también en cuenta, como establece el art.10.1 CE, que las normas relativas a los derechos fundamentales deberán ser interpretadas conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el resto de tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Y, concretamente el art.15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos¹⁵⁷ reconoce el derecho de toda persona a una

¹⁵⁶ DÍEZ-PICAZO, L / GUILLÓN, A: ‘Sistema de Derecho Civil’, vol.7, Ed. Tecnos, Madrid 2016, pp. 258-259.

¹⁵⁷ <http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>

nacionalidad. También el art. 7 de la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho a la nacionalidad del niño desde que nace, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996 en su art.24.3.

Poseer una nacionalidad permite ejercer los derechos básicos de la persona (acceder a la educación, asistencia sanitaria, trabajo, propiedad, libre circulación, ejercicio de derechos civiles y políticos y, por último, a recibir asistencia y representación a nivel internacional) y su carencia supone la inexistencia como persona dentro de la comunidad internacional¹⁵⁸. La Corte Internacional de Justicia reconoció en fallo 6 de abril de 1995 (Caso Nottebohm) la libertad de los Estados para establecer los requisitos para otorgar su nacionalidad, pero además señaló que debe existir una suficiente conexión para que se pueda internacionalmente ser considerado nacional¹⁵⁹.

Dada la importancia que supone poseer una determinada nacionalidad para la persona, nuestro legislador ha previsto en el art.17.1 c) del CC¹⁶⁰ un supuesto de adquisición de la nacionalidad de origen por nacimiento con el que pretende evitar las situaciones de apatridia, y otro supuesto, también de origen por nacimiento, para aquellos casos en los que la filiación no resulte determinada, como se establece en el art.17.1 d). También el legislador constitucional en el art.13.4 CE¹⁶¹ se refiere a las situaciones de apatridia. Además, España desde 1997 está adherida a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954¹⁶², y aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida a través del Real Decreto 865/2001, de 20 de julio¹⁶³. Por el momento, no ha sido ratificada por España la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia¹⁶⁴, que en su artículo 2 establece una importante

¹⁵⁸ <http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/archivo/0173.pdf?view=1>, p. 3.

¹⁵⁹ <http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/archivo/0173.pdf?view=1>, p. 4.

¹⁶⁰ «Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad».

¹⁶¹ «La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España».

¹⁶² «BOE» núm. 159, de 4 de julio de 1997.

¹⁶³ «BOE» núm. 174, de 21 de julio de 2001.

¹⁶⁴ <http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0007.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0007>

presunción¹⁶⁵. No obstante, la respuesta del Congreso el 10 de octubre de 2017 fue que con independencia de su ratificación o no el ordenamiento jurídico español ya prevé normas de prevención de la apatridia en consonancia y con alcance similar al de la Convención¹⁶⁶.

La apatridia puede darse por diferentes causas, como la falta de registro en el momento del nacimiento, la carencia de una aplicación efectiva de los criterios de *ius soli* y/o *ius sanguinis* o en aquellas situaciones de abandono. Por tanto, cobra especial importancia la existencia de un efectivo registro de los nacimientos¹⁶⁷, que como ya se ha visto constituye el punto de partida para asegurar la identidad de una persona.

7. CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se ha podido ver la importancia que adquiere la identidad biológica como punto de partida en la formación de la identidad de toda persona. Conociendo nuestra '*verdad personal*' conseguimos conciliar lo que hemos llamado identidad estática (aspecto biológico) con la identidad dinámica (rasgos de la personalidad), construyendo así nuestra propia identidad, aquella que nos hace ser como realmente somos. Y, a pesar de que la identidad personal no aparece reconocida como un derecho autónomo, se ha visto como deriva de los derechos fundamentales del libre desarrollo de la personalidad, dignidad de la persona e integridad física y moral, encontrando también amparo constitucional en el art.39.2 (investigación paternidad). También se ha analizado como las diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico protegen las diferentes manifestaciones de este derecho. Pero, por el camino nos hemos encontrado con cierta dispersión normativa, falta de armonización en algunas ocasiones, contradicciones y situaciones de desigualdad o discriminación.

Aunque la identidad personal hemos visto que quedaría amparada en nuestra Constitución, convendría reconocerla de forma más clara, como un derecho autónomo y

¹⁶⁵ '*Salvo prueba en contrario, se presume que un expósito que ha sido hallado en el territorio de un Estado contratante ha nacido en ese territorio, de padres que poseen la nacionalidad de dicho Estado*'.

¹⁶⁶ http://www.congreso.es/112p/e5/e_0051045_n_000.pdf

¹⁶⁷ <http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/archivo/0173.pdf?view=1> p. 9-10

fundamental, que garantice la verdad biológica de toda persona sobre la base de la inequívoca identificación de los recién nacidos, así como el derecho a conocer datos sobre los orígenes biológicos de todas las personas.

En lo que se refiere a la manifestación de identidad personal de cara de conocer los orígenes biológicos, el art.39.2 CE reconoce el derecho a la investigación de la paternidad, el art.180 CC reconoce el derecho de los adoptados a conocer datos sobre sus orígenes biológicos y el art.5.5 LTRH reconoce el derecho de los hijos a obtener información general de los donantes que no incluyan la identidad de estos salvo en extraordinarias circunstancias. Partiendo del principio de igualdad y no discriminación, por razones de nacimiento, entre otras, del art.14 CE y del art.39 CE que reconoce la igualdad ante la ley de los hijos con independencia de su filiación, además del deber de los poderes públicos de asegurar la protección integral de los hijos, me surgen varias preguntas. ¿Tienen todos los hijos garantizado su derecho a la identidad? ¿En qué medida? ¿Se están respetando estos preceptos constitucionales? Al margen de la acción de investigación de la paternidad, cuyo fin no es solo el mero conocimiento del origen biológico, nos encontramos con los casos de personas adoptadas o nacidas a través de TRHA que quieren dar con sus orígenes.

Como se ha visto, nuestro Código Civil recoge el derecho a conocer los datos de los orígenes biológicos de las personas adoptadas, siendo la constancia de estos en el Registro Civil es el punto de partida para ello. Un claro obstáculo a la hora de querer iniciar la búsqueda de orígenes se va a plantear en los casos en que el Registro no contenga esa información. Y, aun conteniendo esa información este derecho aparece limitado por la posibilidad de expedir una nueva inscripción de nacimiento, puesto que si la persona no tiene conocimiento de su condición de adoptado difícilmente se dará cuenta de que esta contiene los datos registrales de la inscripción originaria, que recordemos tiene carácter restringido. Por tanto, esa previsión de la LRC obstaculiza claramente el derecho en cuestión. Además, para que este derecho sea efectivo, una vez que se ha accedido a los datos del Registro es muy importante que exista un mecanismo para dar efectivamente con esas personas. La legislación estatal es muy genérica, simplemente establece el deber de las Entidades Públicas de hacer efectivo este derecho, siendo el papel de las Comunidades Autónomas fundamental, pues su propia legislación regula tanto el acceso

a los diferentes registros como las posibilidades para dar con esas personas. La regulación es variada, por tanto, dependiendo del territorio en el que nos encontremos las posibilidades son diferentes.

En los casos de TRHA el principal problema que se plantea a la hora de conocer los orígenes biológicos es el anonimato de los donantes de gametos. Otro problema con el que nos encontramos es la falta de constancia registral del modo de concepción (o gestación). Está claro que nuestro ordenamiento ha optado por dar prevalencia a la intimidad del donante frente al derecho a conocer los orígenes biológicos. Para nuestro TC esta opción legislativa no resultó inconstitucional en el año 1999, considerando que, dado que se podía obtener información general de los donantes, con la salvedad de su identidad, no se podía considerar que con ello se ocasionara *‘consecuencias perjudiciales para los hijos con alcance bastante para afirmar que se produce una desprotección de éstos’* (FJ 15). En mi opinión, sí se está produciendo una desprotección de estos en la medida en que se está vulnerando el principio de igualdad por razón de nacimiento al negarse a los nacidos por estas técnicas un derecho que sí que tienen reconocido el resto de los hijos. Para respetar ese principio se tiene que reconocer a todos este derecho y con el anonimato no se está protegiendo el interés de la persona más afectada.

Entiendo que existen diferencias entre las personas adoptadas y los nacidos mediante la donación de gametos a través de TRHA. La *‘búsqueda del yo’* de una persona adoptada va a ir acompañada en muchas ocasiones de la idea de abandono o del sentimiento de pérdida, en algunos casos de la sensación de ser diferente... La carga emocional que hay detrás puede que sea mayor que para quienes han nacido mediante la aportación del material genético de un donante, pero toda persona se puede preguntar sobre sus orígenes por la razón que sea, siendo uno mismo el verdadero conocedor de la relevancia que puede suponer a la hora de formar su propia identidad, pues no todos somos iguales y cada persona experimenta las cosas de una manera diferente. No todas las personas adoptadas van a querer conocer información sobre sus orígenes, pero si en algún momento quieren tienen esa posibilidad. Sin embargo, las personas nacidas mediante TRHA que tengan la necesidad de conocer sus orígenes no tienen actualmente esa posibilidad, y de lo que se trata es de poder garantizar este derecho a todos los hijos por igual, protegiendo así su bienestar.

Si el derecho a conocer los orígenes de los adoptados prevalece sobre el derecho a la intimidad de quienes le dieron en adopción ¿por qué no debe prevalecer en el caso de las TRHA? Carece de sentido justificar esta diferencia de trato en una disminución de las donaciones o en que así se favorece la relación del hijo con las personas receptoras. El secreto va en contra de la confianza que debe haber en las relaciones familiares y de los intereses del niño, aparte de otorgar más protección al donante y a la pareja receptora que a ese niño y su derecho a la identidad.

Más allá del problema del anonimato, nos encontramos con que la inscripción en el Registro no refleja los datos relativos a la concepción/gestación de los nacidos a través de estas técnicas, por lo que en principio estas personas no lo van a saber. Pese a ello, habrá casos en los que resultará obvio o al menos podrá deducirse que tuvo que intervenir un donante para la concepción; por ejemplo, cuando son parejas homosexuales las que han optado por estas técnicas.

Si se quiere respetar el principio de igualdad de los hijos ante la ley con independencia de su filiación y garantizar el derecho a la identidad se debería poner fin definitivamente al anonimato de las donaciones, al igual que ha ido sucediendo en varios países de nuestro entorno. Respecto al sistema de la ‘doble ventanilla’ lo considero inadecuado debido a que no soluciona el problema, puesto que nos vamos a seguir encontrando desigualdades en función de si quienes han acudido a estas técnicas han elegido un donante anónimo o no. Aparte, para poder garantizar este derecho la previsión del art.7.2 LTRHA debería desaparecer, pues ningún sentido tendría reconocer este derecho si los padres pueden ocultar como han sido concebido/gestado a sus hijos.

Un problema importante si se da fin con el anonimato de los donantes sería el de la retroactividad o no de la medida. En mi opinión en ningún caso se debe producir un levantamiento automático de los anonimatos. Hay que tener en cuenta que quienes donaron con anterioridad lo hicieron con una serie de garantías, entre las cuales el anonimato, sin el cual puede que muchas personas no hubieran realizado la donación. Pero del mismo modo, el derecho a conocer los orígenes tiene un gran peso. Por lo que abogaría por la revelación consensual de la identidad a través de un procedimiento de mediación previo a cualquier revelación identificativa. Otro problema sería que el turismo reproductivo se vería favorecido en aquellos países en los que las donaciones sigan siendo anónimas; esto es algo inevitable. La única solución considero que es crear consciencia

de la importancia de la identidad y normalizar estas nuevas realidades, haciendo ver que el secreto no protege el interés de la persona que se quiere traer a este mundo.

Respecto de la gestación por sustitución, la ley nada dice sobre la posibilidad de llegar a conocer a la madre gestante. Dada la prohibición de realizar esta técnica en nuestro país, las parejas españolas siguen acudiendo al extranjero a realizarla, por lo que poco puede hacer nuestra legislación para que estas personas den con los datos sobre sus orígenes hasta que no se regule y admita en España. Y, en mi opinión, la posibilidad de llegar a conocer los datos de la gestante no debiera tampoco descartarse, pues al fin y al cabo es parte de la identidad de esa persona y, aunque la gestante no sea en ocasiones también la madre genética la mera gestación puede producir cambios epigenéticos. Otro problema importante que se está planteando también con esta técnica es el hecho de que se llega a desconocer el criterio biológico en los casos en que la comitente es aportadora del material genético, cosa que no sucede a la hora de determinar la paternidad biológica. Tampoco se tiene en cuenta el principio de voluntad creacional, consiguiendo que la madre intencional no pueda ser determinada como la madre legal, incluso aunque sea también la genética. Los problemas derivados de esta técnica deberían solucionarse dando una regulación coherente en nuestro país para que no sigan ocurriendo estas cosas y los niños que hayan nacido a través de esta técnica se encuentren en la misma situación y con las mismas posibilidades que el resto de hijos nacidos por medio de otras técnicas.

En definitiva, si queremos garantizar esta vertiente del derecho a la identidad, el hecho de comunicarle a un hijo su condición de adoptado o de revelarle que ha nacido a través de TRHA considero que más allá de un deber moral de los padres debería plasmarse como un deber legal, como ha hecho ya legislación catalana con la adopción. Son muchos los niños adoptados, los niños nacidos a través de TRHA, y contarles cómo vinieron a este mundo, forma parte de su historia y de su identidad, y no debiera serles negada. Y, aparte de eses deber legal, debería haber un mecanismo en el Registro Civil para que toda esta información pueda ser constatada por estas personas al llegar a la mayoría de edad, con carácter restringido, como ocurre actualmente con la inscripción originaria de la adopción, pero de una manera más evidente, que permita efectivamente que esas personas puedan ser conocedoras de su situación. Son hechos que no debieran tener publicidad, pero sí que se tiene que garantizar su conocimiento por las personas afectadas. Las familias han evolucionado y se tiene que percibir como algo normal que no todos venimos al mundo de la misma manera. También se tiene que hacer ver a esos padres que la

ocultación carecería de sentido si, efectivamente, sus hijos van a tener la posibilidad de conocer su situación llegada la mayoría de edad, pues con el secreto no van a conseguir lo inevitable y las consecuencias de ocultar dicha información pueden ser mucho peores.

Para que todo lo anterior fuera posible debería de promulgarse una ley que regulara el proceso de acceso y búsqueda de los orígenes biológicos, tanto para las personas adoptadas como para las nacidas a través de TRHA, existiendo una misma acción para ambos casos, meramente identificativa sin posibilidad alguna de crear vínculos jurídicos. Para los casos de TRHA la información identificativa podría obtenerse a través del acceso al Registro Nacional de Donantes, en los mismos términos que el acceso a la inscripción originaria de nacimiento de los adoptados. La ley debería dar cabida, además, a una misma regulación a nivel estatal a la hora de conseguir las informaciones de los registros. Y, sobre todo, debería contemplar un procedimiento obligatorio de mediación previo a conocer a esas personas, pues recordemos que el reconocimiento del derecho a conocer los orígenes no es ni absoluto ni incondicionado, y siempre puede entrar en conflicto con los derechos fundamentales de otras personas.

Me gustaría, por último, recalcar la importancia de unos servicios de asesoramiento especializados a lo largo del proceso tanto de adopción como de TRHA, que asesoren e informen a todos los intervinientes; y también en los procesos de búsqueda de orígenes, que hagan ver la importancia que tiene la identidad para las personas y que ayuden a normalizar estas situaciones.

En lo que se refiere a la identificación del recién nacido en el momento de su nacimiento, no hay duda de la importancia que adquiere el uso de un método adecuado e inequívoco que permita proteger su derecho a la identidad. Hoy en día, con los avances científicos y tecnológicos, podemos asegurar prácticamente al cien por cien la identidad del recién nacido, vinculándolo así con su madre tras el parto. Sabemos que compaginando el codificador neonatal con las muestras de ADN de madre y niño nos hallamos ante un método del todo fiable. Aun así, la mayoría de los centros hospitalarios siguen haciendo uso del método de las huellas plantar/dactilar, a sabiendas de que su fiabilidad deja mucho que desear, dado que para su fiabilidad se requiere que sean

realizadas por profesionales cualificados y empleando instrumentos de una determinada calidad, cosa que no se está haciendo.

La normativa registral actual tiende a proteger en mayor medida el derecho a la identidad, pero aun así no parece resultar del todo efectiva. Podría haber sido bastante más eficiente exigiendo la huella dactilar del recién nacido, en lugar de la plantar, dado que las diferencias entre el porcentaje de fiabilidad de unas y otras son bastante considerables (80% de la huella dactilar frente a 25% de la huella plantar). Y, aun exigiendo la huella dactilar el legislador se habría quedado corto, pues ya se ha visto que tal y como se han venido realizando las improntas no resultan del todo fiables. Por lo tanto, la normativa autonómica sigue jugando todavía un papel fundamental, pero la regulación es dispar, lo que origina importantes diferencias de cara a la protección del derecho a la identidad¹⁶⁸.

A mi parecer, debería ser implantado a nivel nacional aquel sistema que aporte una mayor fiabilidad y que nos permita proteger de manera más segura este derecho, es decir, la combinación del codificador neonatal junto a las muestras de ADN, como ha señalado el Comité de Estándares de la Sociedad Española de Neonatología. La cuestión podría solventarla la normativa registral exigiendo este sistema tal y como hace ahora con el sistema de las huellas, siendo las Comunidades Autónomas las que desarrollen y establezcan los estándares y procedimientos a seguir en cada hospital, como han venido haciendo hasta ahora.

El único inconveniente que parece que pueden plantear las muestras de ADN sería el coste de los análisis, ya que sería superior al del estudio de las huellas. Como afirman los expertos, podría justificarse su uso pues serían pocos los casos en los que sería necesaria la comprobación; y, efectivamente combinando este sistema con la codificación neonatal y siguiendo las recomendaciones y pautas adecuadas no debería de haber problemas en este sentido y, en el caso de que los hubiese y se tuviera que contrastar el ADN, se podría estar seguro de que la verdad biológica quedaría garantizada.

¹⁶⁸ La ‘verdad biológica’ de los recién nacidos en aquellas Comunidades Autónomas que han implantado ya el método de la muestra de ADN queda asegurada al 99’99%, mientras que el porcentaje de quienes han nacido en Comunidades en las que se exige la huella plantar o la huella dactilar disminuye considerablemente a la hora de poder asegurar esta.

8. BIBLIOGRAFÍA

- BERROCAL LANZAROT, A.I: 'La identidad personal. El nombre y apellidos. El interés superior del menor' en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, nº 760, marzo 2017.
- DÍEZ-PICAZO, L / GUILLÓN, A: *Sistema de Derecho Civil* vol.7, Ed. Tecnos, Madrid 2016.
- FERNÁNDEZ SESSAREGO, C: '*El derecho a la identidad personal*' Ed. Astrea 1992.
- FLORES RODRIGUEZ J: '*El derecho a la identidad del niño en las nuevas formas de familia*', Ed. La Ley 2014.
- GARRIGA GORINA, M: '*La adopción y el derecho a conocer la filiación de origen: Un estudio legislativo y jurisprudencial*', Ed. Aranzadi 2000.
- GÓMEZ BENGOCHEA, B: '*Derecho a la identidad y filiación*', Ed. Dykinson 2007.
- GÓMEN BENGOCHEA, B: 'El derecho a la identidad filial o biológica en el Ordenamiento Jurídico Español' en *Revista Cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales*, nº 72.
- LINACERO DE LA FUENTE, M: 'Derecho a la identidad personal: el nombre y los apellidos', *Derecho Civil I*, Ed. Tirant Lo Blanch, 2013.
- LLEDÓ YAGÜE, F / OCHOA MARIETA, C / MONJE BALMASEDA, O: '*Comentarios Científico-Jurídicos a la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida*', Ed. Dykinson 2007.
- ORDÁS ALONSO, M: 'El parto anónimo a debate' en *Nuevos paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas* ISSN 2346-0377, vol. VI, nº 11 enero-junio 2015
- ORDÁS ALONSO, M: 'El derecho a la identidad genética versus el anonimato del donante en la procreación mediante técnicas de reproducción asistida' en *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil* 2016, nº 1.
-

- RIVERO HERNÁNDEZ, F: '¿Mater Semper Certa Est? Problemas de determinación de la maternidad en el ordenamiento jurídico español', en *Anuario de Derecho Civil*, ISSN 0210-301X, Vol.50, núm. 1, 1997.

- RODRIGUEZ-ALARCÓN GÓMEZ, J: 'El ADN en la identificación del recién nacido' en *Anales Españoles de Pediatría*, 1997; 46:322-324

- SÁNCHEZ MARTINEZ, M^a O: 'Los orígenes biológicos y los derechos de hijos e hijas: filiación y derecho a saber' en *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*, publicado el 19 de febrero 2016.

- SANZ DÍAZ, M^a C / ESPINAL RAMÓN, M^a I / DOMINGUEZ LUNA, A / FERNÁNDEZ MUÑOZ, S / CARDESA SABIO, F / HERNÁNDEZ PRIETO, M: 'La identificación del recién nacido: asignatura pendiente' en *Matronas Prof.* 2012; 12 (3-4).

- THÉRY, I: 'Anonymat des dons d'engendrement, filiation et identité narrative des enfants au temps du démariage' en *Revista de Antropología Social* 2009, n° 18.

- VELA SÁNCHEZ, A: 'El derecho del adoptado a conocer sus orígenes biológicos', en *Diario La Ley* n° 7526, Sección Doctrina, 13 dic. 2010, Año XXXI, Ref. D-376.

- VILLAMAYOR F: 'Protección jurídica del derecho a la identidad en la adopción: Incidencia de la Convención de los Derechos del Niño' en *Lecciones y Ensayos*, n° 83, Universidad de Buenos Aires, 2007.